



PTA2022

COMITÉ COORDINADOR

PLAN DE TRABAJO ANUAL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES

ÍNDICE

03	Capítulo 01 Glosario
06	Capítulo 02 Introducción
08	Capítulo 03 Antecedentes y metodología
23	Capítulo 04 Programa de trabajo
20	Apartado 4.1 Eje 01. Prevenir los actos de corrupción
32	Apartado 4.2 Eje 02. Detectar las desviaciones a la norma u objetivos institucionales
43	Apartado 4.3 Eje 03. Procesar las acusaciones por incumplir la norma, y sancionar a los culpables
50	Apartado 4.4 Eje 04. Controlar los recursos públicos
58	Apartado 4.5 Eje 05. Fiscalizar los recursos públicos
70	Capítulo 05 Cronograma
78	Capítulo 06 Referencias

CAPÍTULO 01 | Glosario

CCE	Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
CCN	Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
CE	Contraloría del Estado
CICC	Convención Interamericana Contra la Corrupción
CNGMD	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
Código de Procedimientos	Código Nacional de Procedimientos Penales
COMUPLA	Coordinación Municipal de Planeación (en singular o plural)
CONAC	Consejo Nacional de Armonización Contable
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Consulta Ciudadana	Consulta Ciudadana para la Construcción de la Política Estatal Anticorrupción
Contraloría	Contraloría del Estado de Aguascalientes
COPARMEX	Confederación Patronal de la República Mexicana
Corte de 2019	Período comprendido entre el 1° de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019
Corte de 2020	Período comprendido entre el 1° de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020
Corte de 2021	Período comprendido entre el 1° de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021
CPC	Comité de Participación de Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
CS	Contraloría Social (en singular y plural)
DOF	Diario Oficial de la Federación
ENACIT	Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
ENEAC	Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción en los puntos de contacto Gobierno-Microempresas
FECC	Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
FGE	Fiscalía General del Estado
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ITEA	Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
Ley de Contabilidad	Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Fiscalización	Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes

Ley de Presupuesto	Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Ley de Transparencia	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley de Transparencia local	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Ley del SEA	Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Ley del Servicio Civil	Ley del Servicio Civil de Carrera para el Estado de Aguascalientes
Ley del SNA	Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
LGRA	Ley General de Responsabilidades Administrativas
Lineamientos del SNA	Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018
LOAPEA	Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
MICI	Marco Integrado de Control Interno
MP	Ministerio Público
OCA	Organismos Constitucionales Autónomos (en singular o en plural)
OIC	Órgano Interno de Control (en singular o plural)
ONG	Organización no gubernamental (en singular o en plural)
ONUDC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México
OPD	Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal (en singular o en plural)
OSC	Organización de la Sociedad Civil (en singular o plural)
OSFAGS	Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
PDE	Plataforma Digital Estatal
PEA	Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
PED	Plan Estatal de Desarrollo
PNA	Política Nacional Anticorrupción
Poder Judicial	Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
POE	Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
PS	Programas Sociales
PTA	Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes (en singular o plural)
SEA	Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

SED	Sistema de Evaluación del Desempeño
SEF	Sistema Estatal de Fiscalización
SESEA	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
SESNSP	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Sistema 6	Sistema de Información Pública de Contrataciones previsto en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
SNA	Sistema Nacional Anticorrupción
SNF	Sistema Nacional de Fiscalización
SNT	Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
SPC	Servicio Profesional de Carrera o Servicio Civil de Carrera
STJ	Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes
UNCAC	Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

CAPÍTULO 02 | Introducción

El presente documento integra las estrategias y acciones que el Comité Coordinador realizará durante 2022 para promover, en términos del artículo 9º, fracción III de la [Ley del SEA](#) la [PEA](#), dando cumplimiento a su objetivo central: “Coordinar a las instituciones públicas en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en el control y fiscalización de los recursos públicos”.

En los siguientes capítulos, se desarrolla un diagnóstico del estado actual de cada uno de los 5 Ejes de la [PEA](#), así como los medios (en adelante, Sub-Ejes)¹ y prioridades consideradas para su ejecución en el presente ejercicio, que en conjunto con los diversos entes públicos que integran el aparato gubernamental en nuestra Entidad, están previstos a realizarse en un período que abarca los 3, 6 y 9 años.

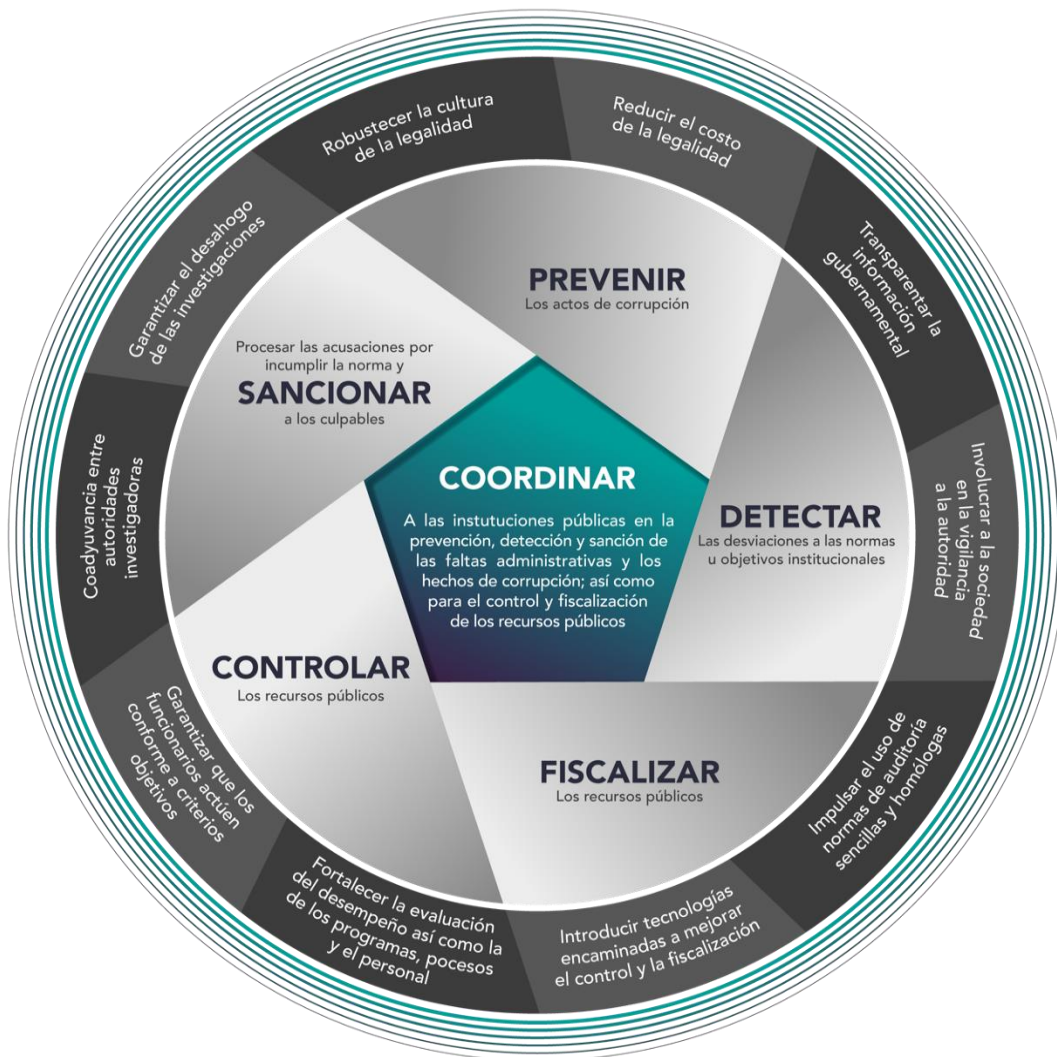
A partir del diagnóstico de cada Eje y Sub-Eje, así como de las hipótesis clave establecidas en la [PEA](#) para interpretar el progreso en cada prioridad, se deducen los objetivos, metas y líneas de acción específicas que contribuyen a realizar el objetivo central.

La manera en la que cada Sub-Eje incluido en este [PTA](#) contribuye al logro de la coordinación que se pretende, se esquematiza en la Figura 01.

¹ Para trabajar este año, se retoman 9 de los 10 medios que incluye la [PEA](#).

Figura 01

Medios a través de los cuales se realizará cada Eje de la Política Estatal en la materia



Fuente: SEA 2021a, 6.

CAPÍTULO 03 | Antecedentes y metodología

El 27 de mayo de 2015 fue publicado en el [DOF](#), el decreto de reforma al artículo 113 de la [Constitución Federal](#) en materia de combate a la corrupción, fijando las bases del [SNA](#) y la obligación de las entidades federativas de crear Sistemas Locales Anticorrupción para la coordinación de esfuerzos en la materia. Asimismo, el 18 de julio de 2016 se publicaron en el [DOF](#) los decretos por los que se expidieron las leyes generales que dotaron de facultades al [SNA](#).

En el ámbito local, la creación del Sistema Estatal Anticorrupción sucedió el día 05 de septiembre del 2016 con la publicación en el [POE](#) del decreto 366 que reformó el artículo 27 C, adicionó un párrafo al artículo 52; reformó el artículo 73, adicionó un párrafo al artículo 80, reformó el artículo 82 y adicionó los artículos 82 A y el 82 B a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Producto de la reforma a la constitución local referida, el día 8 de mayo del 2017 se publica la [Ley del SEA](#).

El [SEA](#) está conformado por el [CCE](#), un Comité de Participación Ciudadana y un Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. El [CCE](#) incluye instituciones que investigan y sancionan faltas administrativas, además, de representantes de instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción, funciones que realiza mediante bases y principios establecidos en la [Ley del SEA](#), para lograr una efectiva coordinación entre sus integrantes.

Ahora bien, como responsable de establecer mecanismos de coordinación, el [CCE](#) cuenta con la facultad de elaborar un Programa de Trabajo atendiendo a lo determinado en el artículo 82 B de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como del artículo 9º, fracción I de la [Ley del SEA](#) para delinear las actividades que el [CCE](#) promoverá entre los entes públicos para avanzar en la realización de los objetivos de la [PEA](#) durante este año.

Previo a la aprobación de ese instrumento rector, durante el 2019, se implementó el primer [PTA](#), que consistió en la propuesta de diversas actividades agrupadas en cuatro ejes: transparencia y gobierno abierto, concientización de la ciudadanía, tecnologías de la información y comunicación, y perfeccionamiento de la normatividad del sistema; con la

finalidad de sentar las bases y los primeros pasos a seguir en el combate a la corrupción por parte del **SEA**.

Asimismo, para 2020, el **PTA** se presentó a través de cuatro Ejes de trabajo: Gobierno Abierto; Sensibilización Ciudadana; Gobierno Electrónico; Gestión de Riesgos, Propuesta de Reforma y Buenas Prácticas; así como un Eje de trabajo Transversal referente a Municipios. Objetivos que buscaban involucrar al ciudadano en el combate a la corrupción, emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); revisar y proponer mejoras a la normatividad, así como a procesos clave y, por último, propiciar el fortalecimiento municipal en el combate y control de la corrupción, todo ello bajo un enfoque de transparencia de la información.

El 29 de enero de 2021 a través del acuerdo ACT-CC-SESEA/29/01/2021.01, el **CCE** aprobó la **PEA**, y dos meses más tarde, el 29 de marzo, a través del acuerdo ACT-CC-SESEA/29/03/2021.03, aprobó su Programa de Trabajo 2021, el primero alineado consecuentemente con los ejes, sub ejes y prioridades plasmados en la **PEA**.

Como ya se mencionó, el objetivo central de nuestra Política, consistente en “coordinar a las instituciones públicas en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en el control y fiscalización de los recursos públicos”, logrando establecer un nuevo paradigma en el que las instituciones públicas de todos los poderes y niveles de gobierno deben colaborar para romper la conexión entre los funcionarios corruptos y sus fuentes de ingresos ilegítimas.

Para alcanzar su objetivo central, se plantean en la **PEA** un conjunto de objetivos esquematizados conforme al siguiente árbol de objetivos:

Figura 02

Árbol de objetivos de la Política Estatal Anticorrupción

Fines



Medios

Fuente: SEA 2021a, 82

Tomando en cuenta que, la [Ley del SEA](#) establece en su artículo 9º, fracción III que es facultad del [CCE](#) promover la [PEA](#), la cual establece una metodología para dar seguimiento al progreso de cada institución en los objetivos trazados, y retroalimentar a los organismos públicos cuyas acciones no impacten positivamente a lograr las prioridades que establece dicha política.

Con el fin de dotar de operatividad a la [PEA](#), a través de los Programas de Trabajo Anuales del [CCE](#) se procedió al análisis de la distribución de las cargas de trabajo de las autoridades ejecutoras establecidas en la [PEA](#) en cuanto a las responsables de realizar las prioridades de corto, mediano y largo plazo.

Cuadro 01

Participación de las autoridades ejecutoras en la realización de la Política Estatal Anticorrupción durante el período (2021-2029)

Participación de las autoridades ejecutoras en la realización de la Política Estatal Anticorrupción durante el período (2021-2029)		
Prioridad	Total de prioridades atendidas en el período de 9 años	Promedio de prioridades atendidas por año
SESEA	9.0	1.0
CPC	9.0	1.0
Administración Pública Estatal y Municipal	4.0	0.4
Contraloría del Estado	3.0	0.3
OIC	8.0	0.9
ITEA	5.0	0.6
Entes públicos del Estado	17.0	1.9
FGE	1.0	0.1
Secretaría de Finanzas	2.0	0.2
Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT)	2.0	0.2
FECC	4.0	0.4
Poder Judicial	3.0	0.3
Poder Legislativo	7.0	0.8
OSFAGS	7.0	0.8
Sala Administrativa	3.0	0.3

Entes públicos con OIC	4.0	0.4
Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM)	1.0	0.1
Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes (IPLANEA)	1.0	0.1
COMUPLA	1.0	0.1
OCA	2.0	0.2
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CEDHA)	1.0	0.1
Comisión para el fortalecimiento de OSC	1.0	0.1
Secretarías de Finanzas o Tesorerías municipales	1.0	0.1
Asuntos Internos de Seguridad Pública	1.0	0.1
OIC de municipios con Asuntos Internos de Seguridad Pública	1.0	0.1
Municipios	12.0	1.3
Dependencias estatales	1.0	0.1
OIC representados en el CCE	1.0	0.1
Secretarías del H. Ayuntamiento	1.0	0.1
Secretarías de Seguridad Pública municipales (o equivalente)	1.0	0.1

Fuente: Elaboración propia con base en SEA 2021b, 11.

En el presente ejercicio, partiendo de la distribución de corto, mediano y largo plazo de la PEA, y dando continuidad a lo plasmado en 2021, se propone una selección de las prioridades de corto, mediano y largo plazo a abordar en 2022.

Cuadro 02

Prioridades de corto plazo (2021-2023)

		Prioridades de corto plazo (2021-2023)																		
Eje	Sub eje	Prioridad	SESEA	CPC	Admon. P. Estatal y Mpal.	Contraloría del Estado	OIC	ITEA	Entes públicos del Estado	FGE	Secretaría de Finanzas	SEGUOT	FECC	OSFAGS	Sala Administrativa	Entes públicos con OIC	Secretarías de Finanzas o Tesorerías municipales	Asuntos Internos Seg. P.	OIC de municipios con Asuntos Internos de SP	Municipios
1. Prevenir los actos de corrupción	1. Reducir el costo de la legalidad	1	X																	
	2. Robustecer la cultura de la legalidad	5														1				
		6	1	1																
		7		X	X	X	X	X												
		8		1																
		9		1																
	14										1									
2. Detectar las desviaciones a las normas u objetivos institucionales	3. Involucrar a la sociedad en la vigilancia a la autoridad	15		1																
		16		1																
	4. Transparentar la información gubernamental	18					X													
		24															1			
		25								1										
3. Procesar las acusaciones por incumplir la norma, y sancionar a los culpables	5. Coadyuvancia entre autoridades investigadoras	27								1	1									
		28	1				1							1						
		29																1	1	
	6. Garantizar el desahogo de las investigaciones	30					X							X	X					
		31												1						
4. Controlar los recursos públicos	8. Fortalecer la evaluación del desempeño así como la de los programas, los procesos y el personal	43														1				
		47																		1
5. Fiscalizar los recursos públicos	9. Impulsar el uso de normas de auditoría sencillas y homólogos	50					1							1						
	10. Introducir tecnologías encaminadas a mejorar el control y la fiscalización	55														X				
Participaciones en el corto plazo			3	6	1	1	4	2	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1
Participaciones promedio por año			1.0	2.0	0.3	0.3	1.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3



Prioridad con líneas de acción proyectadas en el PTA 2022

Prioridad atendida en 2021

Prioridad que se ejecuta de manera continuada en los PTA de 2021 como en el de 2022

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 03

Prioridades de mediano plazo (2024-2026)

		Prioridades de mediano plazo (2024-2026)																							
Eje	Sub eje	Prioridad	SESEA	CPC	Admon. P. Estatal y Mpal. Contraloría del Estado	OIC	ITEA	Entes públicos del Estado	Secretaría de Finanzas	SEGUOT	FECC	Poder Judicial	Poder Legislativo	OSFAGS	Entes públicos con OIC Instituto de Planeación (IPLANEA)	COMUPLA	OCA	Com. de Derechos Humanos	Comisión para el fortalecimiento de OSC	Municipios	Dependencias estatales	OIC representados en el CCE	Secretarías del H. Ayuntamiento		
1. Prevenir los actos de corrupción	1. Reducir el costo de la legalidad	2						1					1												
		3							1																
	2. Robustecer la cultura de la legalidad	10					1																		
		11		X			X														X				
2. Detectar las desviaciones a las normas u objetivos institucionales	4. Transparenciar la información gubernamental	19						1				1	1				1				1	1			
		20								1															
		21	1		1			1	1																
		22						1	1																
		23											X												
		26																			1				
3. Procesar las acusaciones por incumplir la norma, y sancionar a los culpables	6. Garantizar el desahogo de las investigaciones	32	X				X																		
		33									1			1								1			
4. Controlar los recursos públicos	7. Garantizar que los funcionarios actúen conforme a criterios objetivos	35																			1				
		39							1														1		
		40						1					1								1				
	8. Fortalecer la evaluación del desempeño o así como la de los programas, los procesos y el personal	44			1	1								1											
		45						1				1	1			1	1	1	1	1	1				
		48																			1				

		Prioridades de mediano plazo (2024-2026)																							
Eje	Sub eje	Prioridad	SESEA	CPC	Admon. P. Estatal y Mpal. Contraloría del Estado	OIC	ITEA	Entes públicos del Estado	Secretaría de Finanzas	SEGUOT	FECC	Poder Judicial	Poder Legislativo	OSFAGS	Entes públicos con OIC	Instituto de Planeación (IPLANEA)	COMUPLA	OCA	Com. de Derechos Humanos	Comisión para el fortalecimiento de OSC	Municipios	Dependencias estatales	OIC representados en el CCE	Secretarías del H. Ayuntamiento	
5. Fiscalizar los recursos públicos	9. Impulsar el uso de normas de auditoría sencillas y homologas	52													1										
	10. Introducir tecnologías encaminadas a mejorar el control y la fiscalización	53				1																			
		56						1																	
Participaciones en el mediano plazo			2	1	2	1	1	3	9	1	1	2	2	5	2	1	1	1	2	1	1	7	1	1	1
Participaciones promedio por año			0.7	0.3	0.7	0.3	0.3	1.0	2.7	0.3	0.3	0.7	0.7	1.7	0.7	0.3	0.3	0.7	0.7	0.3	0.3	2.3	0.3	0.3	0.3



Prioridad con líneas de acción proyectadas en el PTA 2022

Prioridad atendida en 2021

Prioridad que se ejecuta de manera continuada en los PTA de 2021 como en el de 2022

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 04

Prioridades de largo plazo (2027-2029)

		Prioridades de largo plazo (2027-2029)															
Eje	Sub eje	Prioridad	SESEA	CPC	Admon. P. Estatal y Mpal.	Contraloría del Estado	OIC	Entes públicos del Estado	FECC	Poder Judicial	Poder Legislativo	OSFAGS	Sala Administrativa	Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM)	Municipios	Secretarías de seguridad pública municipales	
1. Prevenir los actos de corrupción	1. Reducir el costo de la legalidad	4						1									
	2. Robustecer la cultura de la legalidad	12						1									
		13		1													
2. Detectar las desviaciones a las normas u objetivos institucionales	3. Involucrar a la sociedad en la vigilancia a la autoridad	17							1	1	1						
3. Procesar las acusaciones por incumplir la norma, y sancionar a los culpables	6. Garantizar el desahogo de las investigaciones	34													1	1	
4. Controlar los recursos públicos	7. Garantizar que los funcionarios actúen conforme a criterios objetivos	36															
		37															
		38	1					1									
		41													1		
		42									1						
	8. Fortalecer la evaluación del desempeño, así como la de los programas, los procesos y el personal	46						1	1				1	1	1		
		49				1											
5. Fiscalizar los recursos públicos	9. Impulsar el uso de normas de auditoría sencillas y homólogas	51	1	1		1	1	1				1	1				
	10. Introducir tecnologías encaminadas a mejorar el control y la fiscalización	54	1					1									
		57														1	
		58														1	

Prioridades de largo plazo (2027-2029)															
Eje	Sub eje	Prioridad	SESEA	GPC	Admon. P. Estatal y Mpal.	Contraloría del Estado	OIC	Entes públicos del Estado	FECC	Poder Judicial	Poder Legislativo	OSFAGS	Sala Administrativa	Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM)	Secretarías de seguridad pública municipales
Participaciones durante el largo plazo			4	2	1	1	3	7	1	1	2	2	2	1	1
Participaciones promedio por año			1.3	0.7	0.3	0.3	1.0	2.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3



Prioridad con líneas de acción proyectadas en el PTA 2022

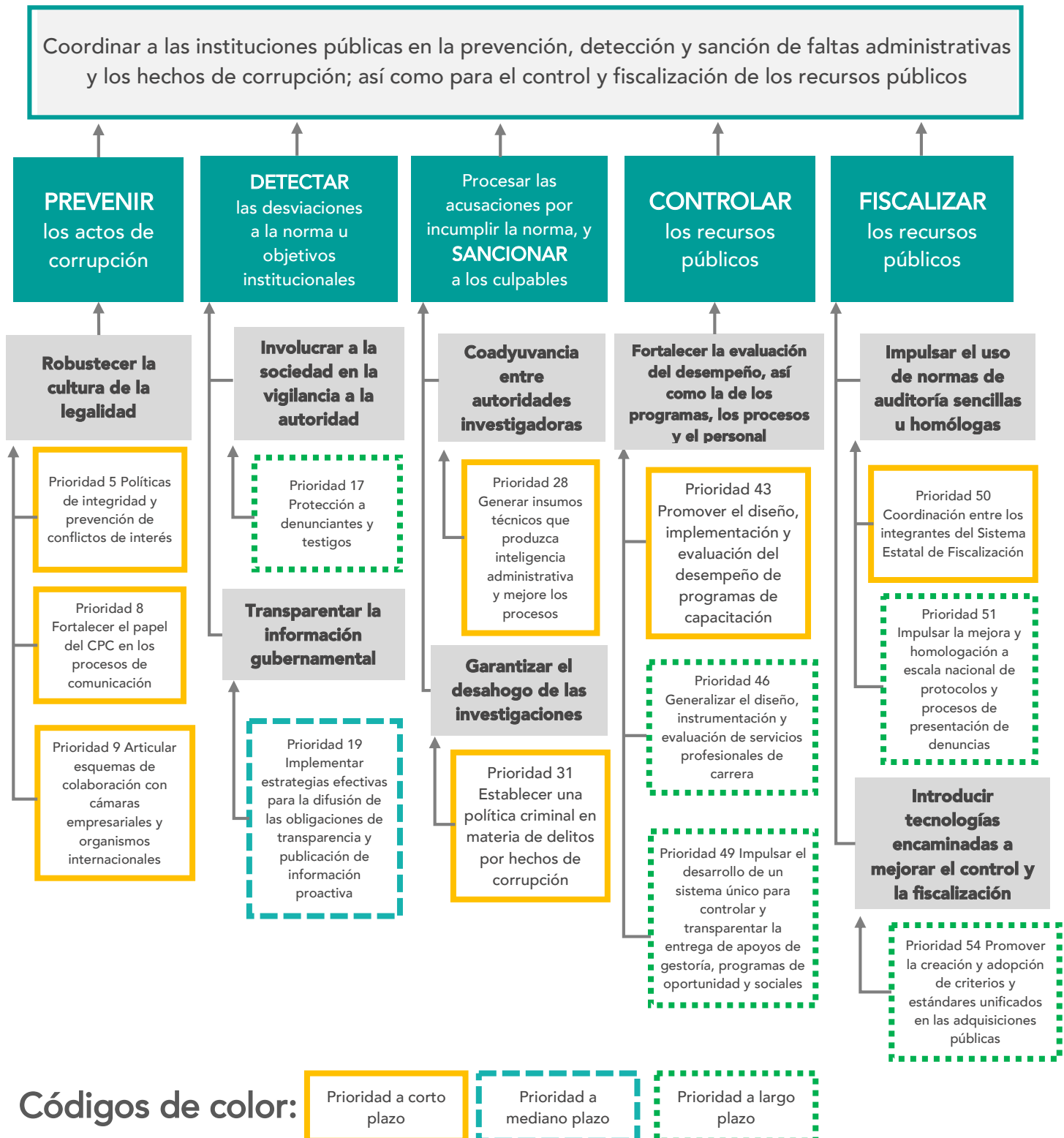
Prioridad atendida en 2021

Prioridad que se ejecuta de manera continuada en los PTA de 2021 como en el de 2022

Fuente: Elaboración propia

Figura 03

Selección de prioridades de la Política Estatal Anticorrupción a atender en 2022



Fuente: Elaboración propia

Establecidas las prioridades de corto, mediano y largo plazo a atender en 2022, se desarrolló en el Capítulo 04, el diagnóstico correspondiente, dividido por Eje, Sub Eje y Prioridad, conforme al siguiente esquema:

Figura 04

Desarrollo del diagnóstico a partir de las prioridades de la PEA



Fuente: Elaboración propia

Teniendo como base la PEA y los instrumentos programáticos aplicables, dicho diagnóstico realiza un análisis sustentado en evidencia cuantitativa y cualitativa, recabada a la luz del marco regulatorio vigente.

Dicha evidencia, procede de estudios externos, de académicos y OSC, así como de los Informes del CCE y de otros insumos producidos por la SESEA como lo son el *Atlas Municipal 2021*, el *Estudio Municipal sobre Marco Integrado de Control Interno*, la *Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad (ENACIT)*, la *Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción en los puntos de contacto Gobierno-Microempresas (ENEAC)*, o los 14 Grupos de Enfoque realizados con Servidores Públicos para la elaboración de la PEA.

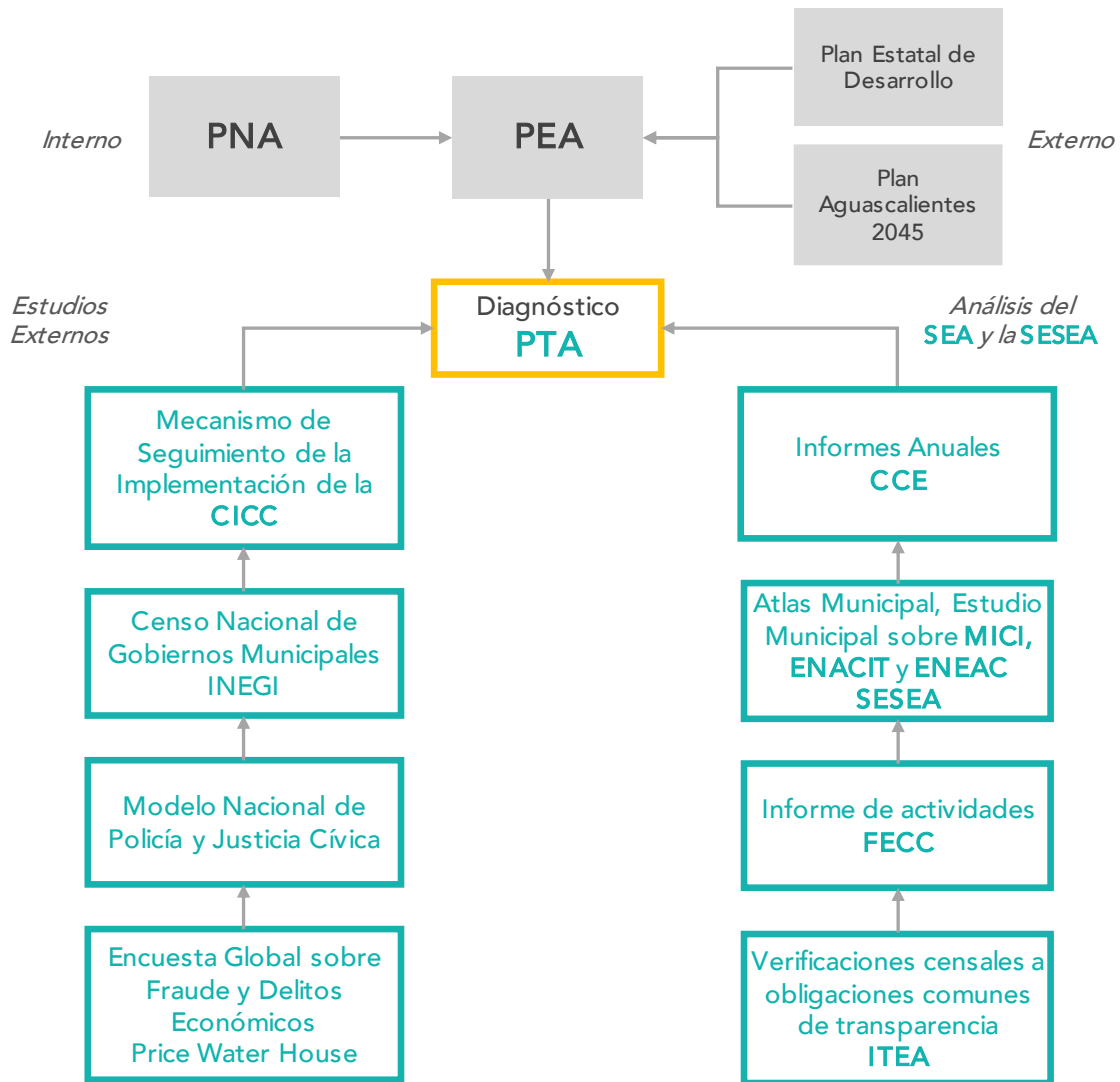
Figura 05

Integración del diagnóstico del PTA 2022

Marco normativo



Marco programático



Estudios externos e internos

+

Fuente: Elaboración propia.

De manera posterior, se procedió a desarrollar el diagnóstico, los objetivos, metas y líneas de acción específicos, teniendo en consideración la metodología de evaluación y seguimiento establecidas en el Capítulo 10 de la [PEA](#). Se prevé que dicha estructura, facilite la incorporación de la correspondiente información al proyecto del Quinto Informe Anual del [CCE](#).

Se interpretó el resultado del diagnóstico alimentado por los estudios externos e internos, a la luz de las hipótesis clave definidas en la metodología de evaluación y seguimiento correspondientes a cada prioridad. A partir de esta compatibilidad, se establecieron los objetivos que figuran en el esquema al final de cada Eje y Sub Eje.

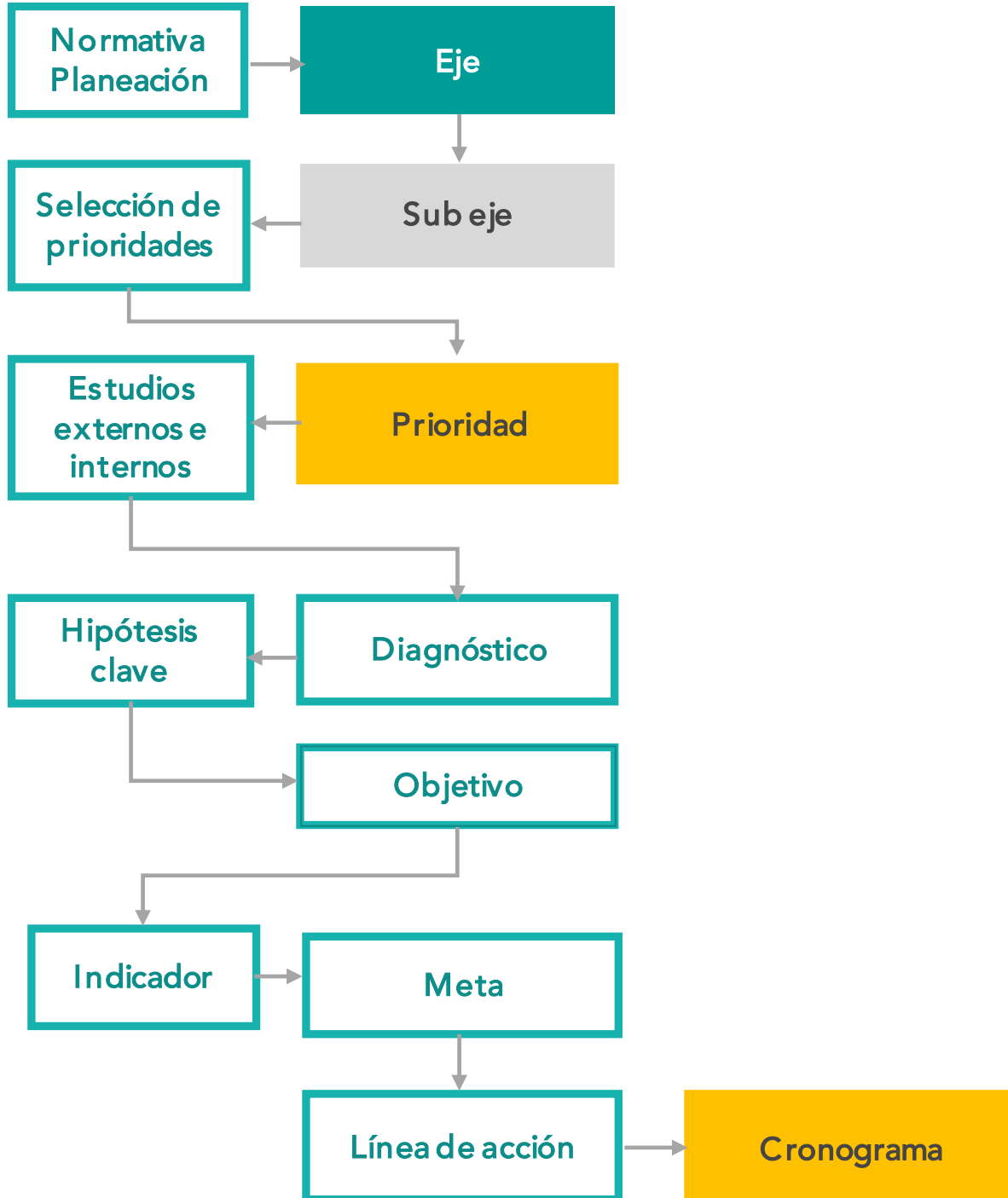
Teniendo en cuenta los datos disponibles en el diagnóstico, y los indicadores correspondientes a cada prioridad e hipótesis clave, se procedió a establecer una meta medible, de acuerdo a los indicadores de la metodología, pero realizables, en términos del diagnóstico.

Finalmente, de dichas metas, y considerando la competencia de las autoridades ejecutoras como del propio [CCE](#) y la [SESEA](#), se propusieron las correspondientes líneas de acción que integran el [PTA](#).

Los esquemas que dan operatividad a cada Eje a nivel de objetivo, meta y línea de acción, aparecen al término de cada Sub Eje del Capítulo 04, en tanto que el cronograma de dichas líneas de acción, figura en el Capítulo 05. El diagrama a continuación describe el proceso de conformación del presente instrumento.

Figura 06

Proceso de conformación del PTA, derivado de las prioridades de la PEA, como de su metodología de evaluación y seguimiento



Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 04 | Programa de Trabajo

Apartado 3.1

Eje. 1. Prevenir los actos de corrupción

Sub-Eje 02. Robustecer la cultura de la legalidad

Conforme al artículo 134 de la [Constitución Federal](#), los recursos económicos que manejen tanto la federación como las entidades federativas y los municipios deben de administrarse conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En el mismo sentido, el artículo 8 de la *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción*, adoptado en el año 2003, mandata que cada estado parte procure "...aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas".

La normativa interna aplicable al caso de Aguascalientes se contiene en los artículos 16 y 49 de la [LGRA](#). El primer artículo, prevé que todo funcionario debe sujetar su actuación al Código de Ética aplicable a la entidad a que esté adscrito, facultando a la Contraloría Estatal como a los [OIC](#) para expedir tales Códigos, que a su vez deben ajustarse a los [Lineamientos del SNA](#), publicados el 12 de octubre de 2018 en el [DOF](#). El artículo 49, por su parte, establece que incurre en falta administrativa no grave el servidor público que no cumpla con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan su código de ética.

Los [Lineamientos del SNA](#) además de establecer los contenidos y estructura mínimos que deben prever los Códigos de Ética de todos los entes públicos del país, estipula en su lineamiento décimo primero, que para la aplicación de estos Códigos, "cada ente público, previa aprobación de su respectivo Órgano Interno de Control, emitirá un Código de Conducta, en que se especificará de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética correspondiente".

Cabe añadir que estos instrumentos constituyen uno de los puntos de interés del Principio 1 de la metodología del **MICI**, modelo de aplicación obligatoria en el Poder Ejecutivo, así como en los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, y San José de Gracia, conforme lo establecen el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y los acuerdos publicados en el **POE** el 16 de enero y 2 de octubre de 2017; el 26 de febrero, 30 de abril de 2018, 21 de mayo, 16 de julio, 10 de septiembre, y 3 de diciembre de 2018; 29 de julio y 2 de septiembre de 2019; y 24 de febrero y 31 de agosto de 2020.

Pero debemos tener presente que los **Lineamientos del SNA**, establecen además en su transitorio segundo, un término de 120 días naturales para que las Contralorías Estatales y los **OIC** emitan sus Códigos de Ética, plazo que feneció el 8 de febrero de 2019.

Por lo tanto, es menester y no sólo aconsejable, que la Contraloría del Estado como los **OIC** estatales y municipales cuenten con Códigos de Ética y Conducta consistentes con los **Lineamientos del SNA** para poder imponer sanciones derivadas de su incumplimiento.

Desde el punto de vista programático, la Prioridad 5 de la **PEA** nos plantea el objetivo de **impulsar la adopción, socialización y fortalecimiento de políticas de integridad y prevención de conflictos de interés, en los entes públicos mediante comités de ética o entes homólogos**. En ese sentido, la emisión de Códigos de Ética y Conducta conforme a los **Lineamientos del SNA** es una necesidad inequívoca de los Comités de Ética, pues estas instancias tienen precisamente la función de fomentar y vigilar el cumplimiento de tales preceptos.

Un diagnóstico realizado por la **SESEA**, identificó 40 Códigos de Ética publicados hasta antes del 29 de enero de 2019, de los cuales, 12 fueron dados a conocer a través del **POE** con posterioridad al 12 de octubre de 2018. De la revisión de los mismos se concluyó que dichos Códigos no se ajustaban a lo previsto en el artículo 16 de la **LGRA**, pues con excepción al de Gobierno del Estado, los **OIC** no intervinieron en su emisión, y ninguno atendía a los **Lineamientos del SNA**.

Ante el riesgo de tal incumplimiento, la **SESEA** puso a consideración del **CCE** un Código de Ética Tipo para facilitar a los Órganos Internos de Control, la emisión de

instrumentos consistentes con los [Lineamientos del SNA](#), propuesta aprobada por ese órgano colegiado el 8 de marzo de 2019.

Desde el año 2019 hasta el 2021, el [CCE](#) ha emitido diversas recomendaciones para promover la emisión de Códigos de Ética y Conducta ajustados a los [Lineamientos del SNA](#), como una herramienta para promover la integridad en el sector público.

El trabajo en esta línea ha dado como resultado que, al [corte de 2021](#), el SEA (2021c, 59 y 62) reporte que el 93.1% de los entes públicos que cuentan con un Órgano Interno de Control, cuentan también con un Código de Ética; mientras que el 74.13% cuentan asimismo con un Código de Conducta.

Ahora bien, cabe hacer la precisión de que, entre los contenidos mínimos establecidos en los multicitados lineamientos, se cuenta el relativo a establecer “mecanismos de capacitación y difusión del Código de Ética y de las políticas de integridad”, lo que está dispuesto en el lineamiento noveno inciso e).

Por lo que a ese respecto corresponde, durante el [corte de 2020](#), los entes públicos capacitaron a 3,046 funcionarios en relación a sus Códigos de Ética y Conducta; mientras que durante el [corte de 2021](#), esta cifra se incrementó a 8,940. Visto en relación al total de funcionarios, durante el [corte de 2020](#) se capacitó al 7.5% del total reportado; mientras que durante el [corte de 2021](#), se capacitó al 21.4% (SEA 2021c, 68 y 73).

En esa dirección se ha tenido un avance importante en la administración pública centralizada, cuyas dependencias reportaron en noviembre de 2021, que contaban con 16 Comités de Ética en funcionamiento.

Con este mismo objetivo, el [CCE](#) llegó al consenso de habilitar en su [PTA](#) un programa de difusión relacionado con el contenido de los códigos de ética y conducta, enfocado a los servidores públicos de la [FGE](#), a efecto de robustecer su actuación en el marco de la cultura de la integridad.

* * *

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, una sociedad civil sólida que sea capaz de intervenir en el rumbo de los acontecimientos nacionales requiere de ciertas características, de las cuales la primera es “Tener una lectura coherente del contexto o de la

situación del país, que le permita posicionarse estratégicamente para identificar las posibilidades de hacer avanzar el cambio y la transformación democrática del Estado y de la sociedad” (OEA 2019, 22).

Para cumplir con esta característica, el acercamiento de **ONG** y empresas al ámbito gubernamental es fundamental. En el contexto del **SEA**, el **CPC** es el medio de vinculación y acercamiento de las organizaciones sociales y académicas a las instituciones estatales que contribuyen a disminuir la corrupción, esto conforme al artículo 15 de la **Ley del SEA**. En este sentido, como los representantes de la ciudadanía en el Sistema, el papel del **CPC** implica la formación de redes de colaboración entre organizaciones de todos los ámbitos.

Bajo este contexto, se puede entender que para prevenir los actos de corrupción es necesario robustecer la cultura de la legalidad, esto por medio del acercamiento de la ciudadanía a la administración pública, permitiendo que los individuos participen como mecanismo de control ante la gestión y toma de decisiones de las autoridades.

Teniendo esto en cuenta, el **CCE** estima primordial la promoción de la participación ciudadana paritaria, y el impulso de la figura de la **CS** en lo particular; por ello el **CCE** ha plasmado en la **PEA**, la prioridad 8 implicando el **fortalecimiento del papel del CPC en los procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate a la corrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial**.

Según la **ENACIT** de la **SESEA** (2019), del total de adultos de 18 o más años radicados en Aguascalientes desde hace más de un año, el 60% consideró que la corrupción en el Gobierno del Estado de Aguascalientes había aumentado (poco o mucho), mientras que este porcentaje incrementó a 63% en 2020 (SESEA 2020b) y a 64% en 2021 (SESEA 2021). Ahora bien, al relacionar la importancia que otorgan las personas encuestadas a las instituciones del **SEA** para combatir la corrupción con la percepción sobre si aumentó o no la corrupción en la entidad durante el año, los datos de la encuesta permiten concluir que cuando las personas opinan que el **CPC** tiene mucha responsabilidad en el combate a la corrupción, la probabilidad de que éstas afirmen que la corrupción aumentó durante el año, disminuye en 4%, probabilidad que en 2020 disminuyó 6%, pero en 2021, solo 1%.

A partir de estos resultados, se entiende que cuando los ciudadanos atribuyen más responsabilidad al **CPC** en el combate a la corrupción, tienden a percibir menos que la corrupción ha aumentado.

En esa tesitura, se propone introducir en este **PTA**, una línea de acción encaminada al desarrollo de un Informe Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción como herramienta que facilite la función del **CPC** como difusor del **SEA** ante la sociedad organizada y permita a los ciudadanos en lo individual, conocer los logros y retos que el combate a la corrupción plantea a las organizaciones públicas y privadas.

* * *

Por parte del sector empresarial, la **PNA** resalta que las empresas no se encuentran exentas a sufrir actos de corrupción, pues al realizar trámites con el gobierno, concursar en procesos de compras públicas, así como al establecer acuerdos con proveedores corren el riesgo de sufrir o incluso participar en actos de corrupción como sobornos, tráfico de influencias, acceso a información privilegiada, fraude interno, o lavado de dinero. (SNA 2020).

De acuerdo con la *Encuesta Global sobre Fraude y Delitos Económicos 2020*, que examina las respuestas de más de 15,000 encuestados en 99 países, algunos de los fraudes más costosos para las empresas son el abuso de información privilegiada, fraude fiscal, lavado de dinero, soborno y corrupción (PWC 2020).

En la edición 2018 de la *Encuesta de Delitos Económicos 2018 Fraude y Corrupción: un Análisis de su Impacto en las Organizaciones*, se hizo hincapié que en México alrededor de dos terceras partes de los delitos económicos eran cometidos por actores que pertenecían a la misma empresa; en este mismo sentido se destacó que en materia de corrupción, 8 de cada 10 empresarios encuestados consideraron que el soborno y la corrupción eran prácticas habituales al momento de hacer negocios en México (SNA 2020, 160).

En Aguascalientes, la **ENACIT** de la **SESEA** (2019) identificó que el 21% de los encuestados percibían que los actos de corrupción se daban en mayor medida entre las empresas y el gobierno. Un año después, este instrumento puso en relieve que el 5% de los encuestados cree que el sector más afectado por la corrupción es el concerniente al desarrollo económico (SESEA 2020b, 40).

En este sentido, se debe destacar que las empresas han adoptado diversos mecanismos de prevención como sistemas de controles internos, programas de cumplimiento, códigos de ética y evaluaciones de riesgos. Además, se han acercado a las autoridades con el fin de establecer mecanismos de colaboración que les permitan identificar espacios de riesgo, y retomar buenas prácticas en la materia.

Por ello, la **PEA** incluye la Prioridad 9, consistente en **articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales y organismos internacionales que fomenten el desarrollo y adopción de políticas de cumplimiento y programas anticorrupción; así como la generación y aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el sector privado, en especial las MiPyMES.**

Fundamentalmente, el principal esquema de colaboración planteado por la **PEA** incluye la articulación de redes ciudadanas, que de acuerdo con el centro de investigación Grupo Faro, se pueden definir como “una forma de organización social que sirve para articular esfuerzos y conocimientos entre distintos actores e instituciones, con el fin de lograr objetivos comunes” (GF 2018, 4).

Lo anterior, en función de que la estructuración de este tipo de redes contribuye al combate de la corrupción desde la sociedad civil, así como a promover la participación ciudadana.

En este sentido, el **CPC** como la parte ciudadana en el **CCE** se encuentra facultado para establecer una red de participación ciudadana, así como para proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos, conforme al artículo 21 fracciones IX y XI de la **Ley del SEA**. La información proporcionada ha permitido identificar que en 2020 la red conformada, no concretó reunión alguna, sin embargo, se destaca que realizó cuatro foros. Los resultados para el periodo 2021 fueron mayormente visibles ya que se realizaron 6 foros, y se programó una reunión de la red, representando un aumento de 42.85% en la realización de reuniones plenarios de la Red de Participación Ciudadana entre 2020 y 2021.

El 3 de agosto de 2021 se instaló la Red de Participación Ciudadana conformada por cuatro sub-redes integradas por el sector de profesionista (Colegio de Contadores Públicos y

Barra Mexicana de Abogados), sector académico (Universidad Panamericana, campus Aguascalientes y Universidad Cuauhtémoc, campus Aguascalientes), sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Mujer Contemporánea y Mujeres Empresarias Mexicanas -MEMAC-) y el Sector Empresarial (Consejo Coordinador Empresarial y [COPARMEX](#) Aguascalientes). El Consejo de esta Red trabajará con el fin de consolidar la participación ciudadana, capacitar en la detección, prevención e investigación de posibles hechos de corrupción, la socialización de temas de corrupción, esto por medio de acciones como la emisión de propuestas de recomendaciones no vinculantes, reformas de leyes y estudios (Vázquez 2021).

Dicha Red, realizó su primera sesión del Consejo el día 07 de octubre de 2021, donde se aprobaron los lineamientos y metodología de trabajo de las sub redes que conforman el proyecto y su calendario de sesiones. Además, de tratar temas como los resultados de la [Consulta Ciudadana](#) y la presentación del Atlas Municipal 2021.

También contribuyó con el [SNA](#), en particular con la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana y con Transparencia Mexicana, para el diseño y puesta en operación de un sistema electrónico -micrositio- de transparencia proactiva consistente en informar sobre el presupuesto que las dependencias y entidades de gobierno estatal y los gobiernos municipales destinarían de manera emergente para afrontar los efectos económicos y sociales derivados del evento pandémico ocasionado por el COVID-19, mismo que fue desarrollado por la [SESEA](#). Por otro lado, se resalta la realización de cuatro foros de participación, contribuyendo en el fortalecimiento de las alianzas con sociedad civil, sector empresarial y académico, para el combate a la corrupción, así como de la iniciativa por la integridad 3 de 3 durante el proceso electoral.

Durante la elaboración de este [PTA](#), el [CPC](#) consideró sumar a esta línea de trabajo, avanzar en la adopción de políticas de integridad en el ámbito empresarial como en el ámbito gubernamental, a través de la Red de Participación Ciudadana, con el apoyo de la información derivada de la Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción en los puntos de contacto Gobierno-Microempresas ([ENEAC](#)).

EJE 1 | **PREVENIR** LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

SUB EJE 2 | **ROBUSTECER LA CULTURA** DE LA LEGALIDAD

PRIORIDAD 5 EJECUTOR ENTES PÚBLICOS-OIC / COADYUVANTE OSFAGS- CE

Impulsar la adopción, socialización y fortalecimiento de políticas de integridad y prevención de conflictos de interés, en los entes públicos mediante comités de ética o entes homólogos.

Objetivo

Fortalecer la actuación íntegra de los servidores públicos de la **FGE** en el desempeño de sus funciones.

Meta

A septiembre de 2022 la **FGE** realizó al menos una campaña para difundir el contenido de los códigos de ética y de conducta dentro de la institución.

Línea de acción

Habilitar un programa de difusión y concientización relacionado con el contenido de los códigos de ética y conducta, enfocado a los **servidores** públicos de la **FGE**, a efecto de robustecer su actuación en el marco de la cultura de la integridad.

PRIORIDAD 8 EJECUTOR CPC / COADYUVANTE CPC-CE

Fortalecer el papel del CPC en los procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate a la corrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial.

Objetivo

Promover la rendición de cuentas a través de la implementación de lenguaje ciudadano en documentos gubernamentales.

Meta

A septiembre de 2022 se cuenta con un documento que facilite la comprensión ciudadana de las acciones del CC.

Línea de acción

Desarrollo de un Informe Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

PRIORIDAD 9 EJECUTOR CPC / COADYUVANTE CPC-CE

Articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales y organismos internacionales que fomenten el desarrollo y adopción de políticas de cumplimiento y programas anticorrupción; así como la generación y aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el sector privado, en especial las MiPyMES.

Objetivo

Promover la articulación de redes ciudadana que contribuyan al combate de la corrupción desde la sociedad civil.

Meta

A febrero de 2022, se entrega la Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción en los puntos de contacto Gobierno-Microempresas (ENEAC).

Línea de acción

Promover la adopción de políticas y o elementos de integridad a través de la Red de Participación Ciudadana.

Apartado 3.2

Eje 02 Detectar las desviaciones a la norma u objetivos institucionales

Sub-Eje 03. Involucrar a la sociedad en la vigilancia a la autoridad

Los artículos 32 y 33 de la [UNCAC](#)² prevén que los estados parte adopten medidas para proteger a testigos y denunciantes de actos de corrupción, contra las posibles represalias o intimidación que pudieran sufrir.

Ahora bien, en materia de responsabilidad penal, el Congreso de la Unión es el facultado para expedir la legislación única en materia procedimental penal que rige en la Republica en el orden federal y en el fuero común, en términos del artículo 73 fracción XXI inciso C, de la [Constitución Federal](#).

En tal contexto los artículos 131 fracciones XII y XV, 132 fracción XII, 140, 153, 155 fracción VIII, 167, 170, 172, 177 fracción II, 220, 223 y 367 del [Código de Procedimientos](#), constituyen garantías para aplicar medidas de protección a favor de las víctimas u ofendidos por cualquier delito, incluidos los de corrupción. Inclusive el artículo 223 de dicho ordenamiento, establece que la denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, "salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad", la identificación del denunciante.

De lo anterior se desprende que si bien es cierto existe el trámite para las denuncias anónimas o bajo reserva de identidad, también no pasa inadvertido que el denunciante bajo estas características no será llamado a comparecer al procedimiento penal.

Por otro lado, si bien es cierto, existen varias medidas para la protección de víctimas, ofendidos y testigos, también es cierto que otras disposiciones en concreto del [Código de Procedimientos](#) pueden dejar en estado de vulnerabilidad a las víctimas y testigos, las cuales se exponen de la siguiente manera (el subrayado es propio):

Artículo 126. Entrevista con otras personas Si antes de una audiencia, con motivo de su preparación, el Defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona o interviniente del procedimiento que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio

² La Convención, fue ratificada por el senado mexicano en el año 2004.

judicial, explicándole las razones por las que se hace necesaria la entrevista. El Órgano jurisdiccional, en caso de considerar fundada la solicitud, expedirá la orden para que dicha persona sea entrevistada por el Defensor en el lugar y tiempo que aquélla establezca o el propio Órgano jurisdiccional determine. Esta autorización no se concederá en aquellos casos en que, a solicitud del Ministerio Público, el Órgano jurisdiccional estime que la víctima o los testigos deben estar sujetos a protocolos especiales de protección

Lo anterior presupone un riesgo tanto para víctimas, ofendidos y testigos, ya que si el MP en relación con las circunstancias del caso, no llegara a estimar la aplicación de algún protocolo especial para garantizar su protección dejaría en estado de vulnerabilidad a los anteriores.

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación:

X. La entrevista de testigos;

Artículo 363. Citación de testigos Los testigos serán citados para su examinación. En los casos de urgencia, podrán ser citados por cualquier medio que garantice la recepción de la citación, de lo cual se deberá dejar constancia.

El testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita. Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento del órgano judicial y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia.

Tratándose de testigos que sean servidores públicos, la dependencia en la que se desempeñen adoptará las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, en cuyo caso absorberá además los gastos que se generen.

Resulta de relevancia, que en el caso de los servidores públicos, éstos se encuentran sujetos a que la dependencia donde laboren, será quien adopten las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia. En el supuesto de que aquella persona contra la que deban testificar, se trate de un servidor público con quien labora, esto involucra el riesgo de que dichos funcionarios testigos sean inducidos a no declarar o a declarar falsamente. Incluso

implica el riesgo de que, al suponer el funcionario que su estabilidad en el empleo estuviera comprometida, se negara a declarar.

Por lo que respecta al derecho administrativo sancionador, el artículo 64 párrafo segundo de la LGRA señala que los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o falta de particulares, o sea testigo en el procedimiento, puede solicitar medidas de protección, y que “la solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el ente público donde presta sus servicios el denunciante”, lo que pudiera resultar inadecuado para protegerlo en caso de que la infracción la hubiere cometido un funcionario o particular con el que guarda relación laboral.

Cabe agregar que las medidas antes referidas, pretenden proteger a los testigos y denunciante que tienen la calidad de servidores públicos, no así a los particulares.

Dichas condiciones, al establecerse en normativa que se produce en el orden nacional, no son susceptibles de corrección por parte de las autoridades locales, en razón de lo cual, el reporte del avance de esta prioridad, que se corresponde con la Prioridad 6 de la PNA, presenta información relativa a otros aspectos a denunciante, testigos y peritos.

A nivel local, sin embargo, el 16 de marzo de 2015, se emitió la *Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes*, en la que se establece que la FGE³ se encuentra facultada de realizar el análisis de vulnerabilidades con base en el cual se establecerán las medidas de protección para preservar la vida y la integridad física de los participantes en el proceso penal o de sus parientes y allegados, cuya intervención en el juicio pueda implicar un riesgo para la víctima o para los ofendidos, los testigos, los peritos que deban participar, los miembros de los cuerpos policiales y ministerios públicos, los jueces, secretarios o demás funcionarios judiciales, y las

³ El artículo 5° de la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes, disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEIYFjKFUfFfP5M9FrzWF5JUBmH6+xKm4/uCYeGsf4TzE> el área encargada de dictar y aplicar las medidas de protección previstas en dicha norma, es la “Dirección de Averiguaciones Previas”.

personas que hayan aportado datos útiles para la investigación del hecho o la individualización de los responsables.⁴

En términos del artículo 14 del ordenamiento en cita, dichas medidas de protección incluyen entre otras:

- 1.- La custodia personal y del domicilio ya sea mediante la presencia directa o bien a través de algún otro medio de seguridad como la video vigilancia;
- 2.- El alojamiento temporal en lugares determinados por la autoridad ministerial;
- 3.- Vigilancia policial en el domicilio de los sujetos protegidos y prohibición de los imputados para que se acerquen al domicilio o lugar de trabajo de los sujetos protegidos;
- 4.- Traslado bajo vigilancia de los sujetos protegidos a los actos procesales en los que deban participar;
- 5.- Entrega de aparatos de telefonía y cambio de número telefónico de los sujetos protegidos, para garantizar la pronta comunicación entre éstos y las autoridades;

Además, conforme a la fracción VII de ese numeral, durante el proceso, se podrá:

- Reservar la identidad de los sujetos protegidos. En estos casos se procurará que las audiencias sean reservadas, y que se asegure el derecho del inculcado a conocer los supuestos de la acusación; y
- Utilizar métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva de los sujetos protegidos.

La *Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes*, prevé un Programa de Protección que opera a través de la FGE, a solicitud del interesado o de la autoridad judicial.

El artículo 21 de esta norma, establece:

Artículo 21.- La autoridad ministerial tendrá con los sujetos protegidos la obligación de brindarles la asistencia médica, técnica, jurídica, sanitaria y económica, así como los

⁴ Véase el artículo 15 en relación al 9° y 12 de la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Enjuiciamiento Penal para el Estado de Aguascalientes, disponible en: <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEIYFjKFUfFP5M9FrzWF5JUBmH6+xKm4/uCYeGsf4TzE>.

elementos que resulten necesarios para garantizar su integridad física, por todo el tiempo que subsista la situación de riesgo que motiva la procedencia del régimen de protección establecido en el Artículo 12 de la presente Ley.

Este Programa de Protección, es financiado a través de una partida específica en el Presupuesto de Egresos de la FGE conforme a lo establecido en el artículo 24 de la ley en comento, disposición que establece que el FGE remitirá al Congreso del Estado un Informe en el que comunique el destino que se dio a los recursos y los resultados estadísticos obtenidos por la operación del programa.

De lo anterior resulta relevante que el PTA 2022 retome la Prioridad 17 de la PEA Generar y ejecutar procesos homologados a escala nacional de protección a denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción con el propósito de incidir en este tema, y garantizar la efectiva protección de los denunciantes a nivel local.

Para avanzar en el cumplimiento de tal objetivo, no obstante las normas procesales en materia penal las determine el Congreso de la Unión, el SEA ya tiene un antecedente de trabajo a través de la SESEA, que en 2021 participó con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (ONUDC) en la Segunda Ronda del Mecanismo de Revisión entre Pares de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como entidad revisora del Estado de Michoacán en la aplicación del artículo 33 de la UNCAC, relativo a la protección de denunciantes.

En esta misma dirección, el CCE participará en el año 2022, según lo prevé en este PTA, en dicho Mecanismo Nacional, en su Tercer Ciclo, en lo referente a la autoevaluación de nuestra entidad federativa en la aplicación del artículo 33 de la UNCAC, apoyándose para ello en la SESEA, cuyo Programa de Trabajo Anual, publicado en el POE del 31 de enero de 2022, ya considera en su línea de acción 7 de la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas, la realización de tal actividad.

Adicionalmente, con el fin de concretar avances en la protección al denunciante, se incorpora a las metas de este PTA, el desarrollo de una línea de trabajo que brinde elementos para proponer un protocolo en materia de protección al denunciante.

EJE 2 | **DETECTAR** LAS DESVIACIONES A LAS NORMAS U OBJETIVOS INSTITUCIONALES

SUB EJE 3 | **INVOLUCRAR a la sociedad en la vigilancia a la autoridad**

PRIORIDAD 17 EJECUTOR SESEA- ENTES PÚBLICOS / COADYUVANTE FECC-CE-OIC

Generar y ejecutar procesos homologados a escala nacional de protección a denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción.

Objetivo

Evaluar la calidad de la protección brindada a los denunciantes de hechos de corrupción, con arreglo a nuestro derecho interno, en referencia a los modelos internacionales.

Meta

A febrero de 2022 se remite a UNODC la autoevaluación de la aplicación del artículo 33 de la UNCAC.

Línea de acción

Participar con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México en la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en su Tercer Ciclo, en lo referente a la autoevaluación de la aplicación del artículo 33 (protección de denunciantes) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Objetivo

Promover esquemas de protección al denunciante para incentivar la denuncia.

Meta

A agosto de 2022 se cuenta con una guía para la emisión de un protocolo en materia de protección al denunciante.

Línea de acción

Desarrollo de una guía para la emisión de un protocolo en materia de protección al denunciante.

Sub-Eje 04. Transparentar la información gubernamental

La Prioridad 19 de la **PEA** nos compele a **implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de transparencia y publicación de información proactiva en materia de prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción, en colaboración con el SNT.**

Ahora bien, la metodología de evaluación y seguimiento de la **PEA**, asocia dichas estrategias, con las evaluaciones que realiza el órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información pública, en relación a la difusión de la información pública de oficio común a todos los sujetos obligados, consignada en el artículo 70 de la **Ley de Transparencia**, sin perjuicio de que el mismo órgano constriña, asimismo, la publicación de todas las sentencias emitidas por el **Poder Judicial**, lo que contribuye a la justicia abierta y aporta información valiosa para detectar posibles hechos de corrupción.

El artículo 68 de la norma en cita, establece que el **ITEA** es la instancia facultada para verificar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones antes mencionadas. Por ello, la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes a todos los sujetos obligados permite comparar entre ellos su avance en materia de transparencia activa en un período determinado, así como su progreso en el tiempo.

De manera específica la Prioridad 19 resalta el rubro de justicia abierta, que el **SNT** define como:

Una filosofía sobre la administración de la justicia que busca superar la opacidad y transitar hacia la transparencia en los procesos judiciales. Es parte de la creación de organizaciones de la sociedad civil. La justicia abierta disminuye el riesgo de prácticas discrecionales en la toma de las decisiones a puerta cerrada y alejadas del público. Se caracteriza por transmitir las sentencias y procesos jurisdiccionales en un lenguaje claro y sencillo que sea comprensible para aquellas personas no especialistas. Además, transparenta los procesos de designación y evaluación de jueces y magistrados. (SNT 2021, 27)

Las calificaciones obtenidas por los sujetos obligados en la primera verificación censal practicada por el **ITEA** en el periodo 2019 a 2021 destacan que en lo que refiere a la difusión

de la información pública de oficio, el Poder Judicial ha mejorado su calificación de manera sostenida los últimos 3 años (SEA 2021c, 203-4).

Sin embargo, la justicia abierta, va más allá de transparentar la labor judicial, pues se habla de prevenir actos de corrupción, en la lógica de disminuir los actos discrecionales de los juzgadores, al poner al escrutinio público las sentencias del Poder Judicial que hayan emitido y el razonamiento que llevó a dichas resoluciones.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ya imponía como obligación la publicación de las sentencias del Poder Judicial de la Federación que hayan causado ejecutoria.

Actualmente la Ley de Transparencia en el artículo 73 establece que los poderes judiciales deben poner a disposición del público las versiones públicas de todas las sentencias emitidas y a nivel local la Ley de Transparencia local establece en el artículo 58 que el Poder Judicial, deberá poner a disposición la totalidad de las sentencias que hayan emitido, en primera y segunda instancia. De los datos proporcionados por el mismo Poder Judicial se puede interpretar que la publicación total de las sentencias, es decir el 100%, se hará de manera gradual, puesto que depende mucho de la capacidad técnica y administrativa de dicho poder, aunado al hecho de que existe una fuerte carga de trabajo en la impartición de justicia, por lo que se espera que los años subsecuentes aumente el porcentaje de las sentencias emitidas.

A este respecto, el SEA (2021c, 216) informó que los avances del Poder Judicial son asimismo importantes, pues el número de sentencias publicadas en el portal del Supremo Tribunal de Justicia incrementó a más del doble, al pasar de 2,404 a 7,260 entre los cortes de 2020 y 2021.

Se debe contextualizar que el 29 de junio de 2021 se publicó en el POE una reforma a diversos artículos de la LOPJ, la cual tuvo como propósito establecer qué instancias del Poder Judicial, incluyendo al Consejo de la Judicatura, ejercerán las funciones de autoridades investigadora, substanciadora y resolutoria en los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Cuadro 05

Autoridades competentes para aplicar la LGRA como su correlativa a nivel local, tratándose de Servidores Públicos del Poder Judicial. Reforma publicada en el POE el 29 de junio de 2021

Infraactor	Conducta	Autoridad investigadora	Autoridad substanciadora	Autoridad resolutora	Fundamento de la LOPJ
Personal de carrera judicial	Faltas no graves	Contraloría Interna del Poder Judicial	Consejo de la Judicatura	Consejo de la Judicatura	Art. 95 Fracc. X; 101; y 103
Personal de carrera judicial	Faltas graves	Contraloría Interna del Poder Judicial	Presidencia del STJ	Pleno del STJ *	Art. 9º Fracc. XVI; 11 Fracc. XIX; y 104
Funcionarios que no son de carrera judicial	Faltas no graves	Contraloría Interna del Poder Judicial	Presidencia del STJ	Presidencia del STJ	Art. 11 Fracc. XIX; y 104
Funcionarios que no son de carrera judicial	Faltas graves	Contraloría Interna del Poder Judicial	Presidencia del STJ	Pleno STJ *	Art. 9º Fracc. XVI; 11 Fracc. XIX; y 104
Contraloría Interna del Poder Judicial	Faltas no graves	Presidencia del STJ	Magistrado designado por la Presidencia STJ	Magistrado designado por la presidencia STJ	Art. 9º Fracc. XVII; 11 Fracc. XX; y 106
Contraloría Interna del Poder Judicial	Faltas graves	Presidencia del STJ	Magistrado designado por la Presidencia del STJ	Pleno STJ a excepción de las autoridades investigadora y substanciadora	Art. 9º Fracc. XVII; 11 Fracc. XX; y 106

* NOTA: En este caso, el Presidente del STJ tiene voto de calidad (véase el Art. 104, párrafo 2 de la LOPJ).
Fuente: SEA 2021c, 397.

Esa tesitura genera un contexto en el que resulta conveniente establecer el buzón digital para la recepción de quejas y/o denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial del Estado, para iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas, además de innovar en materia de transparencia en relación al trámite de dichos procesos.

EJE 2 | **DETECTAR** LAS DESVIACIONES A LAS NORMAS U OBJETIVOS INSTITUCIONALES

SUB EJE 4 | **TRANSPARENTAR** la información gubernamental

PRIORIDAD 19 EJECUTOR PODER JUDICIAL / COADYUVANTE ITEA- CPC

Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de transparencia y publicación de información proactiva en materia de prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción, en colaboración con el **SNT**.

Objetivo

Publicitar los acuerdos emitidos en los expedientes de responsabilidad administrativa.

Meta

Al segundo trimestre de 2022, se encuentra implementada la publicación física de los acuerdos que se emitan por la instancia competente en materia de responsabilidad administrativa.

Línea de acción

Publicitar los acuerdos que emita la instancia correspondiente sobre las quejas y/o denuncias presentadas en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado.

Objetivo

Fomentar la participación ciudadana en el combate a la corrupción a través del ejercicio de sus derechos, publicitando el trámite de sus quejas o denuncias a fin de alcanzar una política de gobierno abierto.

Meta

Al segundo trimestre de 2022, se encuentra implementada la publicación de los acuerdos que se deriven de las quejas y denuncias presentadas.

Línea de acción

Publicitar los trámites sobre las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía en general en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado.

Objetivo

Fomentar la participación ciudadana en el combate a la corrupción a través del ejercicio de sus derechos, implementando en el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes áreas de fácil acceso para que cualquier interesado pueda presentar las quejas y/o denuncias por presuntas faltas administrativas cometidas por funcionarios judiciales.

Meta

Al tercer trimestre de 2022, se encuentra habilitado el "Buzón Digital" para recibir quejas y denuncias en contra del personal judicial.

Línea de acción

Implementar áreas de fácil acceso para los trámites sobre las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía en general en contra del personal Judicial.

Apartado 3.3

Eje 03 Procesar las acusaciones por incumplir la norma, y sancionar a los culpables

Sub-Eje 05. Coadyuvancia entre autoridades investigadoras

La Prioridad 28 de la PEA, *Generar evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, capacidades y desempeño de las instancias encargadas de la detección, investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, que produzca inteligencia administrativa y mejore los procesos correspondientes* es un objetivo que se desprende de la Prioridad 8 de la Política Nacional en la materia. Del diagnóstico de dicho instrumento se desprende que algunos OIC no cuentan con el personal necesario para establecer un área específica de investigación y otra de substanciación (SNA 2020, 74).

Entre los años 2019 y 2020, el personal de la Contraloría incrementó de 95 a 100 elementos mientras que en el orden municipal, el conjunto de los OIC pasó de contar con 106 a 111 funcionarios, considerando que en algunos municipios se redujo el número de funcionarios (SEA 2020, 53-5).

El SEA (2021c, 283) reportó que entre los años 2020 y 2021, la Contraloría incrementó un 14.8% sus recursos, en tanto que, en los municipios de Calvillo, El Llano y Jesús María, los OIC de la administración municipal centralizada incrementaron su presupuesto entre un 6.59 y un 25.9%. En este mismo período, sin embargo, hubo reducciones presupuestales importantes para los OIC de los municipios de Aguascalientes (-11.3%), Rincón de Romos (-59.42%), y San Francisco de los Romo (-20.33%).

Si bien estas tasas de variación del presupuesto de los OIC municipales pueden justificarse por la reorientación del gasto derivada del combate a la pandemia por COVID-19, lo cierto es que muestran que algunas de estas unidades, históricamente se han visto sujetas a cambios presupuestales significativos, que imponen un reto a la regularidad de sus trabajos (SEA 2021c, 284-5).

Por su parte, la **FECC** informó en 2021 la imposición de una sentencia condenatoria contra un ex servidor público de primer nivel, así como la conclusión de carpetas de investigación a través de la implementación de soluciones alternas (FECC 2021, 2).

Sin embargo, los progresos de esta institución y la estadística de delitos cometidos por servidores públicos en Aguascalientes, de acuerdo con el **SESNSP**, reporta un incremento cometidos desde 2018, pasando de 56 delitos en ese año, a 404 en 2021.

El desarrollo incipiente de las instituciones nuevas, y los problemas que repetidamente aquejan a las anteriores, imponen para el **SEA** el reto de sistematizar la información relacionada con la competencia jurídica, las capacidades operativas y el desempeño de las autoridades responsables del control, fiscalización, investigación, trámite y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, reutilizando la información generada por los 73 entes públicos del Estado, en la producción de los informes anuales del **CCE**.

Un ejercicio de esta índole se realizó en 2021, con la entrega del primer *Atlas Municipal 2021*, de la **SESEA**, en el que se generaron insumos técnicos sobre las capacidades comparadas de los **OIC** municipales, comparando su desempeño en los **cortes de 2019 y 2020**, en materias tales como control interno, fiscalización y transparencia.

Este **PTA 2022** prevé que, además de actualizarse dicho análisis con los datos producidos para el **corte de 2021**, también habrá de replicarse este insumo técnico, pero ahora teniendo como objeto de estudio los **OIC** en el orden estatal.

Entre las líneas de acción para este 2022, se destacan los subproductos del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la **PEA** que implican la puesta a disposición al público de las bases de datos que han servido para la elaboración y de los Informes Anuales del **SEA**, así como la entrega por primera vez de los Informes Individuales con base en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de la **PEA**.

Finalmente, este **PTA** prevé la difusión, a través de un micrositio, de las publicaciones del **SEA** que permitan profundizar en el conocimiento de los temas relacionados con el combate a la corrupción.

EJE 3 | PROCESAR LAS ACUSACIONES POR INCUMPLIR LA NORMA, Y **SANCIONAR** A LOS CULPABLES

SUB EJE 5 | **COADYUVANCIA** entre autoridades investigadoras

PRIORIDAD 28 EJECUTOR SESEA-OSFAGS-OIC/ COADYUVANTE OSFAGS- CE- CONSEJO DE LA JUDICATURA

Generar evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, capacidades y desempeño de las instancias encargadas de la detección, investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, que produzca inteligencia administrativa y mejore los procesos correspondientes

Objetivo

Realizar un análisis sobre el funcionamiento, capacidades y desempeño de las acciones que realizan entes públicos municipales y estatales en el combate a la corrupción.

Meta

A mayo de 2022, contar con 3 reportes ejecutivos de datos estadísticos sobre avance en actividades de combate a la corrupción.

Línea de acción

Elaboración del Estudio *Atlas Municipal 2022* (**cortes de 2020 y 2021**).

Línea de acción

Elaboración del estudio *Panorama de los Órganos Internos de Control Estatales 2021* (**cortes de 2019 y 2020**).

Línea de acción

Elaboración del estudio *Panorama de los Órganos Internos de Control Estatales 2022* (**cortes de 2020 y 2021**).

Objetivo

Facilitar el procesamiento de información que integre los informes anuales del **CCE**.

Meta

A septiembre de 2022 el Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción, automatiza la generación de los reportes desarrollados para la producción del 5to. Informe del **SEA**.

Línea de acción

Desarrollo del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la **SEA**.

Objetivo

Mejorar el procesamiento de información estadística en materia anticorrupción a fin de facilitar la comprensión ciudadana.

Meta

A septiembre de 2022, la página del **SEA** difunde públicamente una base de datos que compile información relevante sobre temas relacionados con corrupción, transparencia y rendición de cuentas.

Línea de acción

Publicación de una base de datos que contenga la información empleada para la elaboración de los Informes del **SEA**.

Objetivo

Vigilar la implementación y cumplimiento de la **PEA**.

Meta

A marzo de 2022 se cuenta con una serie de informes que muestren las contribuciones individuales de las instituciones en el desarrollo de la **PEA**.

Línea de acción

Elaboración de Informes Individuales con base en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de la **PEA**.

Objetivo

Promover la difusión de los productos generados por la **SESEA**, contribuyendo en la socialización de información relacionada con la prevención, detección, fiscalización, control y sanción de hechos de corrupción.

Meta

A marzo de 2022 se cuenta con un Micrositio de Estudios producidos y aprobados por la **SESEA**.

Línea de acción

Desarrollo de un Micrositio que concentre los análisis desarrollados por la **SESEA**, y las instituciones integrantes del **SEA**, relacionados con el combate a la corrupción.

Sub-Eje 06. Garantizar el desahogo de las investigaciones

Una de las tareas fundamentales del **SNA** definida en su Ley General, radica en establecer, articular y evaluar las políticas públicas integrales encaminadas a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como a la fiscalización y control de los recursos públicos, cuyas políticas son de aplicación general, las cuales con fundamento al artículo 6° de la **Ley del SNA** serán implementadas por todos los entes públicos de todos los órdenes de gobierno para combatir efectivamente a la corrupción, pues se requiere de una estructura institucional capaz de llevar a cabo actividades de prevención, detección, sanción, control y fiscalización.

Las instituciones integrantes del **SNA** tienen la tarea de fungir como enlace y canal de comunicación con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como las fiscalías de cada entidad federativa, los **OCA**, tribunales de justicia administrativa y representantes de la sociedad civil; en los ámbitos de la **Ley del SNA** y de sus propias atribuciones y competencias.

En ese contexto, los entes que conforman el **SNA** tienen un papel fundamental para combatir los actos de corrupción, como es el caso de la **FECC**, que conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado es un órgano con autonomía técnica operativa, y de gestión, está facultado para investigar y perseguir delitos considerados como hechos de corrupción que los **OIC** de los entes públicos le denuncien y que hayan sido cometidos tanto por funcionarios públicos como por particulares.

En el ámbito local, la **FECC**, ve determinadas sus facultades conforme al artículo 64 de la Ley del **SEA**, destacando las fracciones I, XIV y XVI⁵ donde se establece su injerencia en investigar y perseguir hechos de corrupción, así como sus facultades para la implementación de estrategias y líneas de acción para combatir hechos de corrupción.

⁵ Artículo 64 de la Ley del SEA: La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contará con las siguientes atribuciones:
I.- Conocer y dar trámite a las denuncias que presente tanto el Órgano Superior de Fiscalización, como la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y los órganos de control interno de los entes públicos, cuando detecten alguna irregularidad provocada por hechos de corrupción de acuerdo a la normatividad;
XIV.- Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;
XVI.- Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que presuntamente constituyan delitos en materia de su competencia, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Al respecto el SEA (2021c, 445) reporta que durante los [cortes de 2019, 2020 y 2021](#) se han iniciado 116 carpetas de investigación y se han presentado 12 escritos de acusación por hechos de corrupción. La mitad de estas acusaciones se formuló durante el [corte de 2021](#).

Durante el [corte de 2021](#), la [FECC](#) inició 46 carpetas de investigación, y determinó concluir con la investigación de 30 denuncias: aplicó un criterio de oportunidad, se abstuvo de investigar en una ocasión, mandó 13 al archivo temporal, y decretó en 15 ocasiones el no ejercicio de la acción penal (SEA 2021c, 426).

Las soluciones alternas o formas de terminación anticipada del proceso no constituyeron una forma para dar salida a las investigaciones, pues en ese período se concluyó apenas una carpeta a través de una suspensión condicional (SEA 2021c, 431).

Aún estamos pendientes de conocer la efectividad de la solución jurisdiccional. El SEA (2021c, 433) señala que, durante el [corte de 2021](#), se dictaron los primeros 3 autos de apertura de juicio oral derivados de las investigaciones de la [FECC](#) pero no se había emitido para entonces alguna sentencia relativa a hechos de corrupción por los Tribunales de Enjuiciamiento. Sin embargo, la FECC (2021, 2) reportó una sentencia condenatoria mediante litigación en juicio oral emitida contra un ex servidor público de primer nivel en 2021.

Para llevar a cabo la implementación de estrategias y líneas de acción que logren combatir los hechos considerados como delitos en materia de corrupción en nuestro Estado, es conveniente establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción, la cual consista en todas aquellas estrategias, instrumentos y acciones por parte del Estado, tendientes a controlar y prevenir delitos en cuanto a las conductas criminales en materia de corrupción, para ello debe existir una labor conjunta entre las instituciones y el establecimiento de programas de prevención de delitos y acciones para conocer los fenómenos delictivos que faciliten atender el origen y las causas con el objeto de evitar que ciertos delitos aumenten.

Las estadísticas de delitos denunciados en carpetas de investigación, sin embargo, deben tomarse con precaución pues el Código Penal para el Estado de Aguascalientes no cuenta con un Capítulo relativo a los delitos de corrupción, como sí lo existe en el Código Penal Federal. El Capítulo relativo a Tipos Penales Protectores de la Administración Pública

de nuestro Código local, tipifica actos unilaterales de particulares, ilícitos relacionados con violaciones a derechos humanos o al debido proceso, entre otras conductas que engloban comportamientos tipificados en los instrumentos internacionales como la [UNCAC](#) o la Convención Interamericana contra la Corrupción.

La diferencia entre los tipos penales a nivel federal como local, ha sido materia de varias recomendaciones del [CCE](#): la REC-CC-SESEA-2019.04, reiterada en la REC-CC-SESEA-2020.06-2, y la REC-CC-SESEA-2021.12-3, en las que se sugiere al Congreso local la creación del tipo penal de ejercicio abusivo de funciones, que conforme al artículo 19 de la [Constitución Federal](#), amerita prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, a la fecha, en Aguascalientes los Jueces de Control están imposibilitados para aplicar dicha medida cautelar por la comisión de esas conductas, pues el artículo 14 de la [Constitución Federal](#) también prohíbe la analogía o mayoría de razón en materia penal.

A nivel programático, la Prioridad 7 de la [PNA](#), consistente en [establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción](#) obligatoria en todos los órdenes de gobierno en términos del artículo 6 párrafo segundo de la [Ley del SNA](#), se retoma en la Prioridad 31 de la [PEA](#).

La instauración de la política criminal, funge como una revisión crítica de los sistemas de enjuiciamiento criminal de orden democrático y garantista con estricto apego a derechos humanos y los tratados internacionales de los que México es parte, asimismo, está encaminada al debido proceso y dignidad humana, desarrollando estrategias para atender y atacar los delitos, con el objeto de prevenir y enfrentar los hechos de corrupción (Luna 2021).

El [SESNSP](#) en su Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica afirma que “la impunidad es un indicador clave porque permite conocer la eficacia no sólo de la policía, sino de los actores del sistema de justicia penal, asegurando que una adecuada articulación de la política criminal que asegure que los culpables del delito reciban la sanción que corresponda” (SESNSP 2019, 13).

La Ley Orgánica de la [FGE](#), señala que la [FECC](#) es un órgano con autonomía técnica, operativa y de gestión para investigar y perseguir conductas consideradas como hechos

presuntamente constitutivos de delito en materia de corrupción, entendidos estos como aquellos en los que se verifican estos supuestos:

Artículo 32. ...

I. Que los hechos presuntamente constitutivos de delito doloso sean atribuibles a una persona o personas que tengan el carácter de servidor público y que además se hubiesen realizado bajo las siguientes circunstancias:

- a) En el ejercicio de las funciones que les son propias;*
- b) Con motivo o aprovechándose del empleo, cargo o comisión que se ejerce;*
- c) Mediante la utilización o el empleo de los medios, instrumentos, bienes, recursos, datos o información que les son proporcionados con motivo del empleo, cargo o comisión para el que la persona o las personas imputadas han sido nombradas o designadas; o*
- d) Produciendo como resultado la afectación del patrimonio de cualquiera de los poderes del Estado, de los Órganos Constitucionales Autónomos, de los municipios o de las entidades paraestatales y paramunicipales;*

II. Que los hechos presuntamente constitutivos de delito pudieran integrar cualquiera de los tipos penales protectores de la administración pública, de conformidad con lo dispuesto por el Código Penal para el Estado de Aguascalientes; o

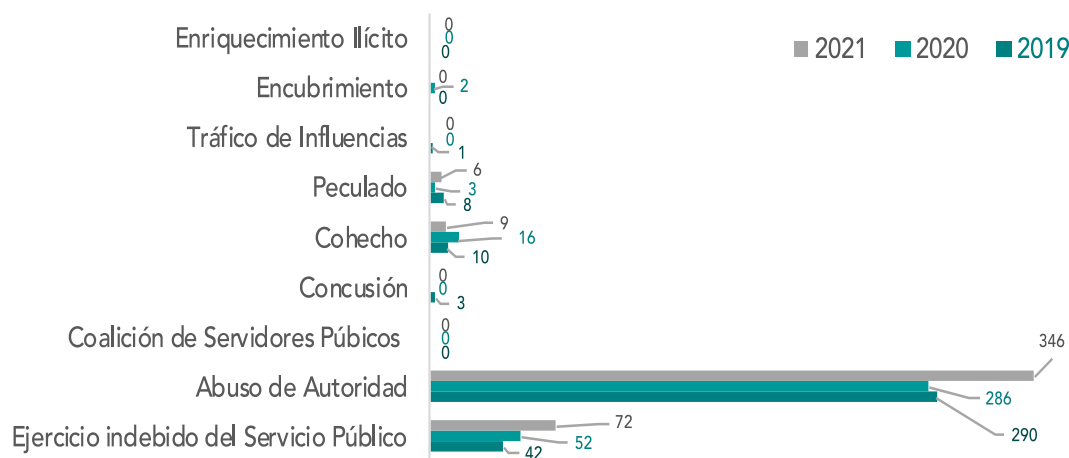
III. Que los hechos presuntamente constitutivos de delito sean atribuibles a una persona o a personas que no tengan el carácter de servidor público, pero que los hayan realizado conjuntamente con quien sí reúna ésta calidad específica o que hubiesen intervenido con el carácter de partícipe, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en relación con cualquiera de los supuestos descritos en las fracciones anteriores.

Sin embargo, el artículo 33 de este mismo ordenamiento señala que estos supuestos no constituyen un límite estricto para la competencia de la FECC como del resto de los elementos que integran la FGE, "sino que fungen como un parámetro básico de organización logística al interior de ella".

A pesar de la falta de un catálogo de tipos penales de corrupción que defina de manera taxativa las conductas a considerar, el SEA (2021c, 183) ha señalado nueve tipos de delito denunciados en carpetas de investigación iniciadas por la FGE que por su similitud con las conductas tipificadas en la UNCAC y las establecidas en el Código Penal Federal, se pueden asociar de manera imperfecta, y para efectos estadísticos, con hechos de corrupción. De dicha revisión, se concluye que la mayoría de los delitos que implican hechos de corrupción son investigados en la práctica por ministerios públicos diversos a los adscritos a la FECC, debido a que solo se turnan a este órgano, las carpetas de investigación en las que los hechos de corrupción constituyen el delito principal a perseguir. De tal suerte, que si bien el SEA (2021c, 183, 433, y 445) reportaba que la FECC había iniciado 46 carpetas de investigación en el corte de 2021, la mayoría de las denuncias que cada año se presentan por este tipo de ilícitos son investigados por ministerios públicos diversos a los adscritos a la FECC, como se muestra a continuación:

Gráfico 01

Delitos Denunciados en carpetas de investigación iniciadas por la FGE bajo la figura típica de...



Fuente: SEA 2021b, 183.

Incluso cabe agregar que si bien el Consejo de la Judicatura reporta en el corte de 2021, una sentencia condenatoria por ejercicio indebido del servicio público y otra por peculado (SEA 20201c, 2322-3), también es cierto que no se reportó en ese período la emisión de alguna

sentencia derivada de las actuaciones de la FECC.⁶ Queda claro entonces que la política criminal en materia de combate a la corrupción no puede perder de vista esta circunstancia.

Es por lo antes reflexionado que el CCE considera que se debe atender esta necesidad y obligación programática introduciendo una línea de acción en el PTA de este 2022 que nos conduzca a contar con un diagnóstico de riesgos en materia de delitos por hechos de corrupción con apoyo de la SESEA.

⁶ Si bien debe aclararse que en el Cuarto Informe de la FECC, se especifica que en el año 2021 sí hubo una sentencia condenatoria (FECC 2021, 11).

EJE 3 | PROCESAR LAS ACUSACIONES POR INCUMPLIR LA NORMA, Y **SANCIONAR** A LOS CULPABLES

SUB EJE 6 | **GARANTIZAR** el desahogo de las investigaciones

PRIORIDAD 31 EJECUTOR FECC / COADYUVANTE FECC

Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción

Objetivo

Impulsar el procesamiento de información para la creación de una política criminal.

Meta

A diciembre de 2022, contar con un diagnóstico de carácter jurídico y estadístico sobre delitos por hechos de corrupción en Aguascalientes.

Línea de acción

Desarrollar un diagnóstico de riesgos en materia de delitos por hechos de corrupción.

Apartado 3.4

Eje 04 Controlar los recursos públicos

Sub-Eje 08. Fortalecer la evaluación del desempeño, así como la de los programas, los procesos y el personal.

La articulación de sistemas nacionales para coordinar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los distintos poderes del estado en la atención de problemas y el mejoramiento de las funciones gubernamentales, ha sido predominante en la gestión pública de México en las últimas décadas. Lo anterior significó que para implementar cambios organizacionales en materias como contabilidad gubernamental, transparencia y acceso a la información pública, combate a la corrupción, y recientemente, mejora regulatoria y gestión documental de archivos; los servidores públicos que intervienen en esas materias sean capacitados y cuenten con un desarrollo profesional que les permita consolidar el cambio organizacional esperado con las reformas legislativas. Un breve repaso de algunas leyes generales que establecen sistemas nacionales permite concluir que, desde su diseño normativo, la capacitación, certificación y desarrollo profesional de servidores públicos es fundamental para la consolidación del cambio gubernamental.

Continuando con la idea anterior, la [Ley de Contabilidad](#) en su artículo 9 fracción IX, faculta al [CONAC](#) para aprobar proyectos de asistencia técnica y apoyos financieros para los entes estatales y municipales que lo requieran, otorgándoles recursos destinados a la capacitación y desarrollo técnico.

Asimismo, el artículo 11 fracción IX, de la citada ley, faculta al Secretario Técnico del Consejo Nacional para asesorar y capacitar a los entes públicos en relación con la instrumentación e interpretación de las normas contables. Finalmente, el artículo 13 fracción III, establece que el Comité Consultivo del Consejo Nacional, en el ejercicio de sus funciones propone y apoya las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la contabilidad gubernamental.

Los recursos públicos destinados a los entes públicos, deben siempre satisfacer los fines para los que fueron otorgados, en ese sentido, el artículo 134 de la [Constitución Federal](#)

establece que los recursos económicos con los que cuenten las entidades federativas y los Municipios deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Como se percibe de lo anterior, para verificar que el ejercicio del gasto público sea para satisfacer los fines planteados, se ha diseñado el **SED**, el cual es definido en la **Ley de Presupuesto**, como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores de desempeño que permitan conocer el impacto social de los programas.

Diversas normas de aplicación obligatoria en toda la República, que establecen sistemas en los que intervienen autoridades de diversos poderes y órdenes de gobierno, instruyen en diferentes sentidos, que se capacite a los servidores públicos para el mejor desempeño de su encargo.

En relación a lo anterior, la **Ley de Transparencia** en su artículo 24 fracción III, establece que para cumplir con las obligaciones que impone la ley, los sujetos obligados deben proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forma parte de los Comités y Unidades de Transparencia. En tanto que el **SNT** debe establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de acuerdo al artículo 31 fracción X de la Ley General en cita.

También la **Ley del SNA** en su artículo 43 establece respecto al Comité Rector del **SNF** que, dicho órgano fomentará el establecimiento de un programa de capacitación coordinado que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización, ésta acción está orientada al fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización.

Con la intención de situar el alcance del objetivo nacional en la entidad, la **PEA** supone que, si el personal de las instituciones conoce las normas que debe aplicar en su unidad administrativa, es menos permisivo respecto de la comisión de irregularidades. Por lo anterior, la metodología de evaluación y seguimiento de la **PEA** vincula que en la medida en que los

servidores públicos sean capacitados en el control de la corrupción, disminuirá el número de observaciones formuladas por el OIC al ente público. Es en este sentido, que el CCE ve pertinente incluir en el PTA 2022, la Prioridad 43, la cual tiene como finalidad **promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas de capacitación, certificación de capacidades y desarrollo profesional en el servicio público enfocadas al control de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública.**

Existen áreas donde la capacitación y acreditación en el cumplimiento de ciertas funciones se encuentra más consolidada debido a que cuenta con un respaldo presupuestal. Por ejemplo, se encuentra el caso de la *Provisión para la armonización contable* en el presupuesto de egresos de la federación, que cada año establece un fondo para la capacitación en materia de contabilidad gubernamental, y que en Aguascalientes financió capacitaciones para 4,088 funcionarios (SEA 2021c, 529-30).⁷

Ahora bien, como se citó con anterioridad, la LOPJ se reformó el 29 de junio de 2021 ajustando el régimen especial de los servidores públicos del Poder Judicial, a las reglas procesales previstas en la LGRA.

Ello sin embargo, plantea nuevas necesidades para el personal de la Contraloría Interna del Poder Judicial, de las áreas del Consejo de la Judicatura, como de las oficinas del pleno del STJ y de la Presidencia del STJ, quienes tendrán que asumir funciones de autoridad investigadora, substanciadora y resolutoria dependiendo de la calidad del infractor, lo que supone un contexto favorable para implementar capacitaciones al personal judicial adscrito a las instancias que conocerán del procedimiento de responsabilidades administrativas en el régimen especial de los servidores públicos del Poder Judicial.

En segundo término, en una línea de trabajo paralela, el CCE estimó conveniente comenzar a acumular progresos en dos prioridades de largo plazo. La primera de ellas es la Prioridad 46 de la PEA que busca **generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de servicios profesionales de carrera en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos,**

⁷ Véase también el *Informe sobre el ejercicio de los recursos del fondo para la Armonización Contable*, contenido en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes Número CACEA/ORD/03/2021, disponible en: https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/Servicios/SAC/SAC_Archivo/ACTA%20CACEA%20ORD%2003%202021_15_10_2021_14_44_22.pdf

basados en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto, cargo o comisión, con perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión.

El artículo 7 de la UNCAC, entre otras cosas, establece los principios y criterios para generar o fortalecer un SPC, de tal manera que se considera prioritario que los estados parte cuenten con procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción.⁸

De acuerdo con Luis Vázquez Cano (2001,1134) el servicio de carrera es la plantilla que conforma la estructura público administrativa que se caracteriza por contar con estabilidad y desempeño profesional en el ejercicio de sus funciones. En palabras del autor, el servicio de carrera es

[...] un segmento importante de los servidores públicos que sirven en la Administración Pública Federal en sujeción estricta a las leyes, de acuerdo a los principios republicanos y de la democracia guiados por la realización del interés público y caracterizados por su estabilidad y desempeño profesional en el ejercicio de sus funciones.

Se debe puntualizar que una de las primeras acciones a realizar para implementar un SPC en la administración pública es la creación de normatividad que lo reglamente. Pero en la PEA se determinó que para dar seguimiento a la realización de este objetivo se debían conocer los mecanismos de meritocracia y capacitación de servidores públicos existentes y contabilizar el número de servidores contratados en la administración después de evaluar sus capacidades y aptitudes.

El SEA (2021c, 567) informó que de los 41,773 servidores públicos estatales y municipales sobre los que se reportó información para evaluar la Política Estatal Anticorrupción, solo el 4.6% ingresó a su institución a través de mecanismos de meritocracia.

⁸ Artículo 7. Sector público

1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos: a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos [...]

La revisión de algunas normas en áreas específicas del servicio público permitió identificar, por ejemplo, que en el caso del sistema educativo nacional, existe una Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Sin embargo, cada Estado es libre y responsable de expedir la normatividad que regule la implementación de un **SPC** gubernamental al no existir alguna disposición en la Constitución Federal, que reserve al Congreso de la Unión legislar ese aspecto.

En ese contexto, el Estado de Aguascalientes cuenta con una **Ley del Servicio Civil**, que fue publicada el día 12 de noviembre del año 2001 en el **POE**, cuyo ámbito de aplicación corresponde a la administración pública estatal y municipal, en tanto que los servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, por su parte, se sujetarán a las disposiciones conducentes en sus respectivas Leyes Orgánicas y sus Reglamentos Interiores.

Es el caso que el Reglamento Interior del **OSFAGS**, publicado en el **POE** el 19 de julio de 2021, establece en su artículo transitorio SEGUNDO que el **OSFAGS** deberá emitir o en su caso adecuar su Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera, así como los manuales de relaciones laborales, de investigación y substanciación y de remuneraciones en un plazo no mayor de 180 días, término que concluyó en el mes de enero de 2022, motivando su inclusión en este **PTA** como avance de la Prioridad 46 que, como se había señalado, es de largo plazo.

La segunda Prioridad de largo plazo considerada en este sub eje del **PTA** para avanzar en 2022, es la número 49, consistente en **impulsar el desarrollo de un sistema único para controlar y transparentar la entrega de apoyos de gestoría, programas de oportunidad, así como los otorgados a los beneficiarios colectivos de los programas sociales.**

Cuando se aborda el tema de programas para el desarrollo social, de gestoría o simplemente la entrega de ayudas sociales, es posible identificar a través de diversos estudios, riesgos como el condicionamiento electoral en el acceso a programas; la incorporación de beneficiarios que emanan de estructuras simpatizantes del partido gobernante; la carencia de reglas de operación claras y específicas, que impiden la definición y cuantificación de la población objetivo y; deficiencias en el uso de plataformas para controlar la entrega de apoyos, que cuando existen no comparten información con otras instituciones o niveles de gobierno, por lo que no se identifican posibles concurrencias y duplicidades, por referir

algunos de los problemas identificados sobre el tema (SEA 2021a, 188-199). Lo anterior produce como efecto que los PS sean susceptibles al manejo opaco de los beneficios y beneficiarios y hace posible el desvío de recursos públicos, así como la prevalencia de prácticas clientelares.

Los gobiernos destinan gran parte de su presupuesto anual para la implementación de programas de desarrollo social y la entrega de ayudas. Por ejemplo, de acuerdo con los montos presupuestados por el Gobierno del Estado y los municipios para los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021, se destinaron poco más de 970 millones de pesos a la entrega de Ayudas Sociales (siguiendo la clasificación por objeto de gasto, concepto 4400 del CONAC).

Un problema fundamental, es que, en la actualidad no existe un sistema único que les permita a todos los entes públicos controlar y transparentar la entrega de apoyos de gestoría, programas de oportunidad, así como los otorgados a los beneficiarios colectivos de los PS dado que refieren una diversidad de sistemas, que no necesariamente permitirían conocer la información de manera oportuna para controlar la entrega de apoyos sociales, y garantizar que estos sean entregados a la población objetivo.

Si bien, las normas en materia de transparencia prevén como obligación la publicación de un padrón de beneficiarios, no siempre es posible que los entes públicos prevengan duplicidades en la entrega de apoyos a beneficiarios, dado que la información se captura al finalizar cada trimestre del año, es decir que, cuando se pone información de los beneficiarios a disposición de los demás entes (ya sea a través de la Plataforma Nacional de Transparencia⁹ o bien los apartados de transparencia de las páginas web de cada ente público), los demás entes, pudieron también entregar apoyos a las mismas personas que otros entes, sin conocer que los beneficiarios recibieron ayuda de diversos entes públicos durante ese mismo trimestre. Además, la búsqueda de información obligaría a consultar individualmente, los formatos de obligaciones comunes de transparencia que capturan todos los sujetos obligados.

Respecto al Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE)¹⁰, se debe señalar que, si bien, durante el proceso de planeación de los

⁹ Disponible en: <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/>

¹⁰ El artículo 62 fracción V de la Ley de Presupuesto, indica que corresponde a las instancias técnicas de evaluación del gasto, revisar los Indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de

programas presupuestarios se define la población objetivo y mensualmente se proporciona información sobre el cumplimiento de metas y beneficiarios atendidos, dicho sistema cumple con la función de ordenar de manera lógica el fin, propósito, componentes y actividades de las instituciones de la administración pública estatal (centralizada y descentralizada) alineándolos con instrumentos de planeación democrática, es decir con el Plan Nacional de Desarrollo y el PED; no obstante, su función no es producir ni compartir información que les permita a los entes públicos, controlar o transparentar la entrega de apoyos de gestoría, programas de oportunidad, así como los otorgados a los beneficiarios colectivos de los PS. En su caso, dicho Sistema permite sistematizar la información de las metas institucionales proyectadas y las alcanzadas durante cada ejercicio fiscal, vinculando la información con la asignación de presupuesto del siguiente ejercicio.

Para finalizar, respecto al Padrón Único de Beneficiarios del Estado de Aguascalientes (PUCGEA), los servidores públicos de las áreas de desarrollo social que participaron en los grupos de enfoque para el diseño de la PEA, refirieron que en efecto es una herramienta que les permite controlar la entrega de apoyos sociales evitando duplicidades en la entrega de ayudas a la población, no obstante también reconocieron que su uso, solo es compartido por las dependencias y algunos OPD, lo que deja fuera la información del ámbito municipal. Como señala la PEA, el uso de la plataforma referida aún no se ha generalizado (SEA 2021a,192).

La Prioridad número 49 implica la participación de instancias que no se encuentran representadas en el CCE, encargadas de la gestión de programas sociales que son blanco de intereses políticos, pero que a la vez suponen una complejidad técnica importante. Por lo anterior, impulsar el desarrollo de un sistema único para controlar y transparentar la entrega de apoyos de gestoría, programas de oportunidad, así como los otorgados a los beneficiarios colectivos de los programas sociales, requiere de aproximaciones parciales para concretarse en el largo plazo.

cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y los OPD o, en su caso, las Dependencias o entidades municipales, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda. Para cumplir con dicha obligación (en el orden estatal) se implementa el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) que administra el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes.

EJE 4 | **CONTROLAR** LOS RECURSOS PÚBLICOS

SUB EJE 8 | **FORTALECER** la evaluación del desempeño, así como la de los programas, los procesos y el personal

PRIORIDAD 43 EJECUTOR ENTES PODER JUDICIAL/ COADYUVANTE CE

Promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas de capacitación, certificación de capacidades y desarrollo profesional en el servicio público enfocadas al control de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública

Objetivo

Fomentar la actuación responsable del personal judicial, así como la coordinación entre las diversas instancias que fungirán como investigadora, sustanciadora y resolutora, conforme las atribuciones que dichos ordenamientos les confieran.

Meta

A septiembre de 2022, se encuentre capacitado el personal adscrito a las instancias que conocerán del procedimiento administrativo de responsabilidades conforme a la **LOPJ** del Estado.

Línea de acción

Implementar capacitaciones al personal judicial adscrito a las instancias que conocerán de la investigación, sustanciación y sanción de las faltas administrativas conforme a la Ley General de Responsabilidad Administrativa y su correlativa del ámbito local.

PRIORIDAD 46 EJECUTOR OSFAGS / COADYUVANTE OSFAGS-CPC-CE

Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de servicios profesionales de carrera en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos, basados en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto, cargo o comisión, con perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión.

Objetivo

Promover el establecimiento de un mecanismo de selección y desarrollo de personal que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública en el estado.

Meta

A febrero de 2022 el **OSFAGS** cuenta con un documento que reglamente el proceso de ingreso, desarrollo profesional, capacitación, evaluación del desempeño y separación del cargo del personal.

Línea de acción

Emisión del Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del OSFAGS.

PRIORIDAD 49 EJECUTOR SESEA-PODER EJECUTIVO ESTATAL Y MUNICIPALES / COADYUVANTE CE- OIC

Impulsar el desarrollo de un sistema único para controlar y transparentar la entrega de apoyos de gestoría, programas de oportunidad, así como los otorgados a los beneficiarios colectivos de los PS.

Objetivo

Promover el intercambio de información entre entes públicos de diferentes niveles de gobierno, que permita evitar la concentración no deseada de apoyos sociales.

Meta

A diciembre de 2022, contar con un reporte ejecutivo de datos sobre la gestión de apoyos y programas sociales.

Línea de acción

Desarrollo de un análisis de riesgos de corrupción asociados a la gestión de apoyos y programas sociales.

Apartado 3.5

Eje 05 Fiscalizar los recursos públicos

Sub-Eje 09 Impulsar el uso de normas de auditoría sencillas u homólogas.

La Prioridad 50 que se refiere a **impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización para la homologación y simplificación de normas, procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización; así como la colaboración con otras instancias públicas que facilite el intercambio de información para maximizar y potencializar los alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción**, contempla que la diversidad de sistemas, principios, prácticas y capacidades de auditoría, fiscalización y control de recursos públicos a escala nacional, es una de las causas principales de la incapacidad para controlar la corrupción en México (SNA 2020, 174).

Para atender ese problema, la prioridad 50 de la **PEA** de manera congruente con los objetos de la **PNA**, establece como estrategia impulsar la coordinación entre los integrantes del **SEF**, para homologar y simplificar normas, procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización, de tal manera que dicho criterio contribuya al impulso de normas de auditorías sencillas y homólogas.

La idea de conformar un **SNF** nace el 17 de febrero del 2010 en la presentación del *Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008*, rendido ante la Cámara de Diputados, donde se manifiesta la intención de coordinar a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, y a los entes de fiscalización superior y entidades de control estatales en la mejora y homologación de los criterios, procesos y procedimientos en materia de auditorías en el sector público.

Este proceso de análisis y consulta para adecuar un cuerpo normativo-operativo de reglas de auditoría, se concretó en la emisión de las Normas Profesionales de Auditoría del **SNF**, a través de las cuales se acordaron y pautaron definiciones, lineamientos y criterios concordantes con los principios fundamentales en materia de auditoría gubernamental y con

las mejores prácticas internacionales, pero a su vez, plenamente operativas para los auditores, tomando en consideración la diversidad de instituciones involucradas (SNF 2014,4).

En el año 2015, con la publicación de las Bases Operativas para el Funcionamiento del **SNF**, se definieron formalmente su estructura orgánica, sus objetivos y los compromisos de los integrantes, permitiendo la formalización de dicho Sistema (SNF 2015).

Posteriormente, el 18 de julio de 2016 se publicó en el **DOF**, la **Ley del SNA** donde se consolida legalmente la competencia e integración del **SNF** y se redefine su integración y funcionamiento. De lo que se obtiene que la **Ley del SNA** ya no considera entre los integrantes del **SNF**, a los municipios. Esto no significa que el **SNF** no hubiera pretendido alguna vez ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de recursos federales y locales mediante la construcción de un modelo de coordinación entre la federación, los estados y municipios, pues el **CCN** dispuso este objetivo en las *Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional* al referirse al Sistema de Información y Comunicación del **SNA** y del **SNF** (SNA 2018, artículo 52).¹¹

Por otro lado, en el ámbito local fueron 2 las iniciativas que dieron origen a la creación del **SEA** en Aguascalientes. La primera, presentada el 15 de noviembre de 2016, no establecía la creación del **SEF**, ni la coordinación de autoridades locales con el **SNF**.¹² La segunda iniciativa fue presentada el 01 de marzo del 2017.¹³ Pero los promotores tampoco contemplaban la existencia del **SEF**. De ello se infiere que el cambio de fondo que incorpora la creación del **SEF**, se dio en las discusiones parlamentarias.

Con la publicación de la **Ley del SEA** en el año 2017, se creó el **SEF** cuyo Comité Rector forma parte del **SEA**, según lo establece el artículo 7° de dicho ordenamiento, con el objeto de "establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de información, ideas y

¹¹ Artículo 52 de las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional. El objeto del sistema es permitir la centralización de la información que generan los órganos integrantes del **SNF**, con la finalidad de ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de recursos federales y locales mediante la construcción de un modelo de coordinación entre la federación, los estados y los municipios.

¹² Para más detalles acerca de la iniciativa presentada el 15 de noviembre de 2016, véase el siguiente enlace: https://congresoags.gob.mx/transparencia/descargar_archivo/6631

¹³ Para más detalles acerca de la iniciativa presentada el 01 de marzo de 2017, véase el siguiente enlace: https://congresoags.gob.mx/transparencia/descargar_archivo/6703

experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos” (véase el artículo 37 de la [Ley del SEA](#)).

El artículo 46 fracción XIV de la [LOAPEA](#), publicada en el [POE](#) el 27 de octubre de 2017, faculta a la [Contraloría](#) para cumplir, coordinadamente con el [OSFAGS](#), las obligaciones que se desprenden de la creación del [SEF](#).

Por otra parte, de acuerdo a las fracciones II y III del artículo 40 de la [Ley del SEA](#), el [SEF](#) es competente para instrumentar mecanismos de coordinación entre todos sus integrantes y para integrar mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos que generen las instituciones competentes en dichas materias.

En este orden de ideas, la [Contraloría](#) como el [OSFAGS](#) (quienes encabezan el Comité Rector del [SNF](#) de manera rotativa), reportaron no haber celebrado sesiones ordinarias o extraordinarias durante dichos cortes.

Con fundamento en el artículo 42 de la [Ley del SNA](#), el [SNF](#) es la instancia facultada para aprobar que las normas profesionales homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, sean obligatorias para todos los integrantes del [SNF](#), es decir, para la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los entes de fiscalización superior de los estados, y los encargados del control interno en las entidades federativas, implicando a la [Contraloría](#) como al [OSFAGS](#).

Sin embargo, en lo que respecta a establecer normas de este tipo aplicables tanto por éstos dos órganos como por las Contralorías Municipales, el artículo 42 de la [Ley del SEA](#) establece que el [SEF](#) es la instancia competente para autorizar dichos instrumentos como obligatorios. Cabe hacer la consideración que en un contexto en el cual el Comité Rector no se convoca, es imposible realizar el mandato que establece este numeral, en su párrafo primero, consistente en que los integrantes del [SEF](#) –es decir, la Contraloría, el [OSFAGS](#) y las Contralorías Municipales- deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.

Paralelamente, la **Contraloría** fijó parámetros para la realización de auditorías en el poder Ejecutivo destacándose la expedición y publicación en el **POE** el 11 de junio de 2021 de las “Normas generales para la realización del proceso de fiscalización” así como los “Lineamientos de los Actos de Fiscalización Realizados por la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría y por las Autoridades Auditoras de los **OIC** de entidades estatales”, publicados a través del mismo medio oficial el 12 de julio de 2021; mismos que contribuyen a la consolidación de una sociedad democrática en la que impere la rendición de cuentas, la transparencia, la responsabilidad institucional y la preservación del interés público.

En este contexto, resulta pertinente promover el intercambio y la reutilización de los datos generados por los entes fiscalizadores a nivel estatal como municipal, generando comparativos a nivel histórico, así como entre entes de la misma naturaleza, contribuyendo a identificar los principales retos en materia de control interno, y redundando en la aplicación más homóloga del **MICI**.

Por otro lado, la Prioridad 51, que tiene por objeto **impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos, contralores y testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control interno competentes**.

En esta prioridad, la homologación es entendida sólo en el orden local y se centra en aquellos protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de los ciudadanos, contralores sociales, testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control interno, que desahogan las autoridades locales.

En materia de combate a la corrupción, el **CPC** tiene un papel muy importante ya que, además de ser la instancia de vinculación con organismos sociales y académicos, cuenta con la facultad para proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Contraloría y al **OSFAGS**. Además, está facultado para proponer al **CCE** mecanismos para incentivar la participación ciudadana en materia de prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como también para proponerle mecanismos para

facilitar el funcionamiento de las instancias de **CS** existentes y recibir información por dichas instancias, todo ello en términos del artículo 21 fracciones VIII, y XII de la **Ley del SEA**.

Ahora bien, para que el **CPC** pueda cumplir con sus objetivos, requiere de la cooperación de distintas instancias civiles como lo son las **CS**, para que le suministren información. La **Ley del SEA** faculta al **CPC** para proponer al **CCE**, mecanismos que mejoren el funcionamiento de las **CS** propiciando que éstas instancias, compartan información con el **CPC**.

Es importante reflexionar la importancia que tiene la comunicación y vinculación entre el **CPC** y las **CS**, ya que al ser efectiva brindará elementos para identificar el desvío de recursos en los **PS**, mejorando los mecanismos de comunicación que poseen estas instancias civiles y alertar sobre posibles hechos de corrupción. Pero, sobre todo, el **CPC** podrá concentrar toda la información que generen estas instancias civiles, y transmitirla a las autoridades del **SEA**.

En el desarrollo de esta prioridad, también se busca la mejora y homologación en los procesos de presentación de las denuncias, toda vez que la **PNA**, establece como causa problemática del fenómeno de la corrupción, la ineficacia en los procesos de denuncia (SNA 2020, 174).

En efecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, señaló en 2019 que 77,549 personas sufrieron algún acto de corrupción, pero sólo el 2.9% lo denunció (SEA 2021c, 619).

Es en este sentido, que el propio **CPC** perseguirá este 2022 generar un vínculo entre el sistema de pre denuncia de la **FGE** (disponible en la página del **SEA**), y la página del propio **CPC**, con el fin de dar un mayor alcance a esta herramienta de denuncia, reduciendo el tiempo de espera.

EJE 5 | **FISCALIZAR** LOS RECURSOS PÚBLICOS

SUB EJE 9 | **IMPULSAR** el uso de normas de auditoría sencillas u homólogas

PRIORIDAD 50 EJECUTOR SESEA-OSFAGS-OIC / COADYUVANTE OSFAGS- CE

Impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización para la homologación y simplificación de normas, procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización; así como la colaboración con otras instancias públicas que facilite el intercambio de información para maximizar y potencializar los alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Objetivo

Homologar el nivel de aplicación de los modelos de control interno en el orden municipal para promover la consecución de los objetivos institucionales; la minimización de los riesgos; y la consolidación de los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamentales.

Meta

A junio de 2022, contar con un reporte ejecutivo de datos estadísticos sobre avance MUNICIPAL del **MICI**

Línea de acción

Impulsar la mejora del Sistema de Control Interno en los municipios a través del estudio **MICI**.

Meta

A junio de 2022, contar con un reporte ejecutivo de datos estadísticos sobre avance ESTATAL del **MICI**

Línea de acción

Impulsar la mejora del Sistema de Control Interno en instituciones estatales a través del desarrollo del estudio **MICI**.

PRIORIDAD 51 EJECUTOR PODER JUCICIAL- CPC / COADYUVANTE CPC-CE

Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos, contralores y testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control interno competentes.

Objetivo

Promover la cultura de la denuncia mediante la utilización de herramientas informáticas que generarán una atención más eficiente y reducirán los tiempos de espera y los cambios de ventanilla.

Meta

A septiembre de 2022, la página del sistema de pre denuncia de la **FGE** y la página del **CPC** se encuentran vinculadas.

Línea de acción

Generar un vínculo entre el sistema de pre denuncia de la **FGE** y la página del **CPC**, para dar un mayor alcance a esta herramienta de denuncia, reduciendo el tiempo de espera.

Sub-Eje 10

Introducir tecnologías encaminadas a mejorar el control y la fiscalización

La PNA estableció como Prioritario **promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten espacios de arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización** (SNA 2020, 18). Dicho objetivo fue retomado por la PEA, en su Prioridad 54 bajo un enfoque distinto; el CCE consideró dos elementos para contextualizar la prioridad nacional en el orden local, el primero radica en reconocer la autonomía de las entidades federativas y los municipios para administrar su hacienda pública y su patrimonio. El segundo elemento, que va en detrimento del primero, radica en que el diagnóstico de la PNA, identifica la necesidad de contar con una ley general que regule todos los procesos de contratación en los ámbitos de gobierno y los poderes, como solución a las problemáticas asociadas en materia de compras, contrataciones y adquisiciones públicas (SNA 2020, 128). Por tal motivo, la intervención de las autoridades estatales y municipales en la promoción de criterios y estándares unificados para las compras y contrataciones públicas, escapa de su esfera de competencia.

La PEA propone como estrategia para fortalecer los procesos de compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que las autoridades locales disminuyan el gasto para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, asignado mediante adjudicación directa; que la modificación de las convocatorias a las licitaciones públicas se reduzcan, favoreciendo la competencia en los procedimientos; que el porcentaje de modificación de contratos sobre la adquisición o arrendamiento de bienes o servicios sea mínima y, en su caso justificada, y finalmente; que las autoridades y la ciudadanía puedan consultar la información relacionada con contrataciones a través del Sistema 6 de la PDE.

Vale la pena tener en mente a lo largo de esta prioridad que, la PEA definió la corrupción como “la asignación de bienes o servicios públicos para lograr un beneficio en perjuicio de alguien” (SEA 2021a, 61). Lo que en materia de compras, contrataciones y adquisiciones públicas reviste mayor importancia por lo riesgoso que podrían ser los actos de corrupción en detrimento de la sociedad.

Con el objeto de prevenir la corrupción, México ha ratificado diversos instrumentos internacionales:

La Convención Interamericana Contra la Corrupción, en su artículo III.5 señala que:

Los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

En la misma dirección, el artículo 9.1 de la [UNCAC](#) señala:

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:

a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;

b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;

c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;

d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo;

e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular declaraciones de interés

respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.

Asimismo, la [Constitución Federal](#) en su artículo 134, párrafos tercero y cuarto, mandata que se privilegie la asignación de contratos de adquisición mediante procedimientos de licitación, y sólo en los casos en que este procedimiento no garantice las mejores condiciones de precio, calidad, y oportunidad, se podrán asignar mediante procedimientos excepcionales previstos en la norma, que aseguren de igual manera, la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

A nivel programático el Eje 1, Política y Gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, señala que una estrategia para erradicar la corrupción, será prohibir las adjudicaciones directas. En tanto que la Ley Federal de Austeridad Republicana (artículo 8, párrafo 2, 2019) señala que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas (ordenamiento aplicable para gobierno federal).

La Organización de Estados Americanos recomendó en 2015 al Estado Mexicano aclarar cuáles circunstancias extraordinarias permitirían, acudir al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, o bien acudir a la adjudicación directa.¹⁴

Ahora bien, en el ámbito local, el [CCE](#) analizó la normatividad en materia de adquisiciones en el orden municipal, y se sistematizó información de la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer en qué porcentaje, el monto gastado por los Poderes Ejecutivos de los Municipios y el del Estado, es asignado mediante procedimientos de licitación pública y, qué porcentaje, mediante adjudicación directa (SEA 2020, 177-9).

De dicho análisis se destaca que, en el [corte de 2021](#), en toda la entidad existió un gasto mayor por medio de licitaciones públicas e invitaciones que por adjudicación directa, pues resalta un 79% de gasto por licitación y un 21% mediante adjudicación directa.

También es preciso señalar que, derivado de la aplicación de la metodología de evaluación y seguimiento de la [PEA](#), se observó que el 44.89% del gasto pagado para la

¹⁴ Véase la recomendación 1.2.3.10 del Informe Final de México del Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (OEA 2016, 70)

adquisición de bienes, arrendamientos o servicios, fueron asignados mediante la adjudicación directa, de acuerdo con las cifras que proporcionaron los entes públicos.

Ello supone un reto a superar, sin embargo, el objetivo de la Prioridad 54 de la PEA es ambicioso y de largo plazo, por lo que se requiere sumar acciones para avanzar en el cumplimiento de tal objetivo.

Por ello este PTA prevé la participación en 2022 con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (ONUDC) en la Tercera Ronda del Mecanismo de Revisión entre Pares de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como entidad evaluada en la aplicación del artículo 9 de la UNCAC, relativo a contrataciones.

Dicho mecanismo arrojará una autoevaluación de las circunstancias locales y actuales, y una valoración con apoyo externo de cómo nuestro derecho interno como nuestras prácticas se ajustan a los estándares internacionales.

EJE 5 | **FISCALIZAR** LOS RECURSOS PÚBLICOS

SUB EJE 10 | **INTRODUCIR** tecnologías encaminadas a mejorar el control y la fiscalización

PRIORIDAD 54 EJECUTOR SESEA- ENTES PÚBLICOS / COADYUVANTE SESEA

Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten espacios de arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización

Objetivo

Evaluar la aplicación de modelos internacionales a la realización de contrataciones, con arreglo a nuestro derecho interno

Meta

A febrero de 2022 se remite a UNODC la autoevaluación de la aplicación del artículo 9 de la UNCAC

Línea de acción

Participar con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México en la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en su Tercer Ciclo, en lo referente a la autoevaluación de la aplicación del artículo 9 (contratación pública y gestión de la hacienda pública) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Objetivo

Promover la disponibilidad del Sistema de Información Pública de Contrataciones de la **PDE** (S6)

Meta

A septiembre de 2022, se han realizado pruebas en el S6 con datos sintéticos.

Línea de acción

Desarrollo del sistema S6 de la PDE.

CAPÍTULO 05 | Cronograma

EJE 1. Prevenir los actos de corrupción		Temporalidad												Institución Responsable Ejecutor / Coadyuvante
Prioridad	Acciones	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Sub-Eje 02. Robustecer la cultura de la legalidad														
5	Habilitar un programa de difusión y concientización relacionado con el contenido de los códigos de ética y conducta, enfocado a los servidores públicos de la FGE, a efecto de robustecer su actuación en el marco de la cultura de la integridad.													FECC- OIC
														OSFAGS-CE
8	Desarrollo de un Informe Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.													CPC
														CPC-CE
9	Promover la adopción de políticas y o elementos de integridad, a través de la Red de Participación Ciudadana.													CPC
														CPC-CE

EJE 2. Detectar las desviaciones a las normas u objetivos institucionales		Temporalidad												Institución Responsable	
Prioridad	Acciones	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ejecutor / Coadyuvante	
Sub-Eje 03. Involucrar a la sociedad en la vigilancia a la autoridad															
17	Participar con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México en la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en su Tercer Ciclo, en lo referente a la autoevaluación de la aplicación del artículo 33 (protección de denunciantes) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.													SESEA- ENTES PÚBLICOS	
														FECC-CE- OIC	
17	Desarrollo de una guía para la emisión de un protocolo en materia de protección al denunciante.													SESEA- ENTES PÚBLICOS	
														FECC-CE- OIC	
Sub-Eje 04. Transparentar la información gubernamental															
19	Publicitar los acuerdos que emita la instancia correspondiente sobre las quejas y/o denuncias presentadas en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado.													PODER JUDICIAL	
														ITEA-CE	

19	Publicitar los trámites sobre las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía en general en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado.													PODER JUDICIAL
														ITEA-CE
19	Implementar áreas de fácil acceso para los trámites sobre las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía en general en contra del personal judicial.													PODER JUDICIAL
														ITEA-CE

EJE 3. Procesar las acusaciones por incumplir la norma, y sancionar a los culpables		Temporalidad												Institución Responsable Ejecutor / Coadyuvante
Prioridad	Acciones	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Sub-Eje 05. Coadyuvancia entre autoridades investigadoras														
28	Elaboración del estudio <i>Atlas Municipal 2022</i> (cortes de 2020 y 2021).													SESEA-OSFAGS-OIC
														OSFAGS-CE-CONSEJO DE LA JUDICATURA
28	Elaboración del estudio <i>Panorama de los Órganos Internos de Control Estatales 2021</i> (cortes de 2019 y 2020).													SESEA-OSFAGS-OIC
														OSFAGS-CE-CONSEJO DE LA JUDICATURA
28	Elaboración del estudio <i>Panorama de los Órganos Internos de Control Estatales 2022</i> (cortes de 2020 y 2021).													SESEA-OSFAGS-OIC
														OSFAGS-CE-CONSEJO DE LA JUDICATURA
28	Desarrollo del Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción (SES-PEA).													SESEA-OSFAGS-OIC
														OSFAGS-CE-CONSEJO DE LA

													JUDICATUR A
28	Publicación de una base de datos que contenga la información empleada para la elaboración de los Informes del SEEA.												SESEA- OSFAGS- OIC
													OSFAGS- CE- CONSEJO DE LA JUDICATUR A
28	Elaboración de Informes Individuales con base en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción.												SESEA- OSFAGS- OIC
													OSFAGS- CE- CONSEJO DE LA JUDICATUR A
28	Desarrollo de un Micrositio que concentre los análisis desarrollados por la SESEA, y las instituciones integrantes del SEEA, relacionados con el combate a la corrupción.												SESEA- OSFAGS- OIC
													OSFAGS- CE- CONSEJO DE LA JUDICATUR A
Sub-Eje 06. Garantizar el desahogo de las investigaciones													
31	Desarrollar un diagnóstico de riesgos en materia de delitos por hechos de corrupción.												SESEA-FECC
													FECC

EJE 4. Controlar los recursos públicos		Temporalidad											Institución Responsable Ejecutor / Coadyuvante	
Prioridad	Acciones	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		
Sub-Eje 08. Fortalecer la evaluación del desempeño así como la de los programas, los procesos y el personal														
43	Implementar capacitaciones al personal judicial adscrito a las instancias que conocerán de la investigación, sustanciación y sanción de las faltas administrativas conforme a la Ley General de Responsabilidad Administrativa y su correlativa del ámbito local.													PODER JUDICIAL
														CE
46	Emisión del Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera del OSFAGS.													OSFAGS
														OSFAGS-CPC-CE-
49	Desarrollo de un análisis de riesgos de corrupción asociados a la gestión de apoyos y programas sociales.													SESEA-PODER EJECUTIVO ESTATAL Y MUNICIPALES
														CE- OIC

EJE 5. Fiscalizar los recursos públicos		Temporalidad												Institución Responsable Ejecutor / Coadyuvante	
Prioridad	Acciones	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Sub-Eje 09. Impulsar el uso de normas de auditoría sencillas u homólogas															
50	Impulsar la mejora del Sistema de Control Interno en los municipios a través del estudio MICI.													SESEA-OSFAGS-OIC	
														OSFAGS - CE	
50	Impulsar la mejora del Sistema de Control Interno en instituciones estatales a través del desarrollo del estudio MICI.													SESEA-OSFAGS-OIC	
														OSFAGS - CE	
51	Generar un vínculo entre el sistema de pre denuncia de la FGE y la página del CPC, para dar un mayor alcance a esta herramienta de denuncia, reduciendo el tiempo de espera.													CPC	
														CPC – CE	
Sub-Eje 10. Introducir tecnologías encaminadas a mejorar el control y la fiscalización															
54	Participar con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México en la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares													ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO-SESEA	

	en su Tercer Ciclo, en lo referente a la autoevaluación de la aplicación del artículo 9 (contratación pública y gestión de la hacienda pública) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.														SESEA
54	Desarrollo del sistema S6 de la PDE.														ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO-SESEA
															SESEA

CAPÍTULO 06 | Referencias

- FECC. Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción. 2021. *Cuarto Informe de Actividades*. Lic. Jorge Humberto Mora Muñoz. Disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/4to_informe_fiscalia.pdf (consultado el 1 de febrero de 2022)
- GF. Grupo FARO. 2018. *Conozcamos más sobre las redes ciudadanas*. Disponible en: <http://confederacionecuatorianaosc.org/wp-content/uploads/2018/04/m-redesciudadanas-2.pdf> (consultado el 11 de julio de 2021).
- INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2019. *Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019*. México: INEGI. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados> (consultado el 21 de julio de 2021).
- ITEA. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 2019. *Verificaciones Censales*. Aguascalientes: ITEA. Disponible en: <https://itea.org.mx/resultados-de-las-verificaciones/> (consultado el 27 de octubre de 2021).
- _____. 2020. *Verificaciones Censales*. Aguascalientes: ITEA. Disponible en: <https://itea.org.mx/resultados-de-las-verificaciones/> (consultado el 27 de octubre de 2021).
- _____. 2021. *Verificaciones Censales*. Aguascalientes: ITEA. Disponible en: <https://itea.org.mx/resultados-de-las-verificaciones/> (consultado el 27 de octubre de 2021).
- Luna Leyva, Porfirio. 2021. Política criminal. En Foro Jurídico. Disponible en <https://forojuridico.mx/politica-criminal/> (consultado el 19 de enero de 2022)
- OEA. Organización de los Estados Americanos. 2016. *Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Informe de México Ronda 5*. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_inf_mex_sp.pdf (consultado el 02 de agosto de 2021).

- _____. 2019. *Observatorio del Sistema de Justicia Penal. Documento Conceptual. El papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Tegucigalpa, HONDURAS: Observatorio del Sistema de Justicia Penal OEA-MACCIH.* Disponible en: <http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/docs/Documento-Conceptual-El-papel-de-la-sociedad-civil-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-y-la-impunidad-en-Honduras.pdf> (consultado el 8 julio de 2021).
- PWC. Price Water House Coopers. 2020. *Encuesta Global sobre Fraude y Delitos Económicos 2020.* Disponible en: <https://www.pwc.com.ar/es/prensa/encuesta-global-sobre-fraude-y-delitos-economicos-2020.html> (consultado el 21 de julio de 2021).
- SEA. Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. 2019. *Segundo Informe Anual del Comité Coordinador.* Aguascalientes: SESEA. Disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/SEGUNDO_INFORME_2020.pdf (consultado el 24 de noviembre de 2021).
- _____. 2020. *Tercer Informe Anual del Comité Coordinador.* Aguascalientes: SESEA. Disponible en: <https://seaaguascalientes.org/documentos/TERCER%20INFORME%20ANUAL%2020%20COMPLETO.pdf> (consultado el 29 de septiembre de 2021).
- _____. 2021a. *Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.* Aguascalientes: SESEA. Disponible en: https://seaaguascalientes.org/documentos/POLITICA_ESTATAL_ANTICORRUPCION.pdf (consultado el 26 de octubre de 2021).
- _____. 2021b. *Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 2021.* Aguascalientes: SESEA. Disponible en: https://www.seaaguascalientes.org/documentos/PTA_CC_2021.pdf (consultado el 11 de julio de 2021).
- _____. 2021c. *Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 2021.* Aguascalientes: SESEA. Disponible en:

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/4to_Informe_SEA.pdf

(consultado el 28 de enero de 2021).

SESEA. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. 2019.

Encuesta en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad (ENACIT).

Aguascalientes: SESEA. Disponible en:

<https://seaaguascalientes.org/documentos/Encuesta%20Estatad.pdf> (consultado el 07 de octubre de 2021).

_____. 2020a. "14 Grupos de Enfoque con servidores públicos". *Revista Íntegros* 1 (julio-

diciembre): 51-117. Disponible en:

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/revista/Revista_Integros_Num1.pdf (consultada el 12 de octubre de 2021).

_____. 2020b. *Encuesta en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad (ENACIT).*

Aguascalientes: SESEA. Disponible en:

<https://seaaguascalientes.org/documentos/Botonera/Encuesta%20Estatad%202020.pdf> (consultado el 07 de octubre de 2021).

_____. 2021. *Encuesta en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad (ENACIT).*

Aguascalientes: SESEA. (Inédito).

SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2019. *Modelo*

Nacional de Policía y Justicia Cívica. México: Secretaría de Seguridad y Protección

Ciudadana (Gobierno Federal). Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542605/DOC_1_MODELO_NACIONAL_DE_POLICIA_Y_JC.pdf (consultada el 8 de diciembre de 2021)

SNA. Sistema Nacional Anticorrupción. 2018. *Acuerdo Mediante el cual el Comité*

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el Análisis para la

Implementación y Operación de la Plataforma Digital Nacional y las Bases para el

Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional. México: Sistema Nacional

Anticorrupción. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541802&fecha=23/10/2018

(consultado el 02 de agosto de 2021).

- _____. 2020. *Política Nacional Anticorrupción*. México: SESNA. Disponible en: <https://www.sesna.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Pol%C3%ADtica-Nacional-Anticorrupci%C3%B3n.pdf> (consultado el 01 de octubre de 2021).
- SNF. Sistema Nacional de Fiscalización. 2014. *Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización*. México: Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de la Función Pública (Gobierno Federal). Disponible en: www.snf.org.mx/Data/Sites/1/npasnf/normasprofesionales_www2014.pdf (consultado el 02 de agosto de 2021).
- _____. 2015. *Bases Operativas para el Funcionamiento del SNF*. Disponible en: <http://www.snf.org.mx/SharedFiles/Download.aspx?pageid=213&fileid=231&mid=326> (consultado el 3 de febrero de 2021).
- SNT. Sistema Nacional de Transparencia. 2021. *El ABC del Gobierno Abierto*. México: INAI. Disponible a través del siguiente enlace: https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/Publicaciones/Documentos/digital_el_abc.pdf (consultado el 3 de febrero de 2021).
- Vázquez Cano, Luis. 2001. Bases para un modelo de servicio público profesional de carrera para la administración pública del gobierno federal. En *El Servicio Profesional de Carrera: Un imperativo para la reforma del estado y modernización de la administración pública mexicana*. Coord. Néstor Fernández Vertti, 1129-1194. México: Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP). Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4510/4.pdf> (consultado el 12 abril de 2021).
- Vázquez, Salvador. 2021. "Instalación de la Red de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción / ARCANA IMPERII". *La Jornada Aguascalientes*. 2 de agosto de 2021, sección Opinión. Disponible en: <https://www.lja.mx/2021/08/instalacion-de-la-red-de-participacion-ciudadana-del-sistema-estatal-anticorrupcion-arcana-imperii/> (consultado el 25 de agosto de 2021).